

CONTESTACIÓN DEMANDA COLPENSIONES_05001310500120230040300_ARIEL DIAZ
PARAMO

Eduilce Correa Arguelles <abogado.4@findlay.com.co>

Mié 15/05/2024 14:02

Para:Juzgado 01 Laboral Circuito - Antioquia - Medellín <j01labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:Natalia Andrea Sepulveda Ruiz <accioneslegales@proteccion.com.co>;guillermotamayo7@gmail.com
<guillermotamayo7@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (17 MB)
ContestacionDemandaColpensiones05001310500120230040300.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de abogado.4@findlay.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Señor
JUEZ PRIMERO (001) LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN
E.S.D.

ASUNTO	CONTESTACIÓN DEMANDA
PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE	ARIEL DIAZ PARAMO CC 14241716
DEMANDADOS	PROTECCIÓN S.A. COLPENSIONES NIT. 900336004-7
RADICADO	05001310500120230040300

Cordial saludo.

EDUILCE CORREA ARGUELLES, en mi calidad de apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa, me permito DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, la cual remito en un archivo adjunto contentivo de los siguientes documentos (103 folios):

- Escrito de contestación
- Historia laboral del demandante
- Expediente administrativo
- Sustitución de poder debidamente conferida.

--

Atentamente,

EDUILCE CORREA ARGUELLES

Abogada externa Colpensiones

E-mail: abogado.4@findlay.com.co

Teléfono: 3003868246



Señor

JUEZ PRIMERO (001) LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN

E.S.D.

ASUNTO	CONTESTACIÓN DEMANDA
PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE	ARIEL DIAZ PARAMO CC 14241716
DEMANDADOS	PROTECCIÓN S.A. COLPENSIONES NIT. 900336004-7
RADICADO	05001310500120230040300

Cordial saludo.

EDUILCE CORREA ARGUELLES, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo a la sustitución de poder adjunto y estando dentro del término¹ de la oportunidad procesal, de manera respetuosa, me permito DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES²-es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio

¹ Notificado por aviso el día 25 de abril de 2024 cuyo término de vencimiento es el día 15 de mayo de 2024, no obstante señala el inciso 3, Parágrafo del artículo 41 CPT y SS “Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá surtida después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia. Por lo que el término de vencimiento para contestar la demanda es el 20 de mayo de 2024.

² Creada mediante **Ley 1151 de 2007 en su artículo 155; Decreto-Ley 4121 de 2011**: Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, **Decreto 2013 de 28 de septiembre de 2012**: Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones. **Decreto Reglamentario 2011 de 2012**: Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones.





del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, identificado con la cédula de ciudadanía 12102957 o quien haga sus veces y quien obra en su calidad de presidente según consta en el Acuerdo No. 012 del 23 de noviembre de 2022 y Acta de Posesión del 02 de diciembre de 2022.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la **Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 6, número telefónico 2170100.**

II. A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Por ser susceptible de ello, el demandante deberá probar todos y cada uno de los elementos fácticos sobre los cuales edifica las pretensiones del libelo demandatorio, por los medios probatorios idóneos y pedidos en la oportunidad procesal respectiva, con las formalidades previstas en la ley y cuando se trata de documentos, estos deben ser expedidos o autenticados por funcionarios competentes. En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 31 numeral 3 del CPT y de la SS me permito pronunciarme respecto a los hechos de la siguiente manera, con el fin de que se fije el litigio con los hechos que no son ciertos y no le consta a mi representada y teniendo en cuenta que son puntos de derecho, lo que aquí se responda como cierto no constituye confesión³, lo cual se procede así:

AL HECHO PRIMERO: Es cierto que “*El señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716, nació en Ibagué (Tolima) el 06 de diciembre del año 1962, según registro civil de nacimiento, que se anexara a esta demanda*”, **lo anterior** de conformidad con el expediente administrativo toda vez que el registro civil de nacimiento anexado con la demanda es ilegible.

AL HECHO SEGUNDO: No es cierto que “*El señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716, contaba con 15 años de servicios cotizados a pensiones, y treinta y cinco años (35) según el artículo 36 de la ley 100 de 1993, señor Juez, por consiguiente, se reúnen las condiciones favorables del régimen de transición*” **toda vez** que de conformidad con la historia laboral, al 1 de abril de 1994 acredita tan solo 453.1 semanas cotizadas, y aunado a lo anterior, a dicha data contaba con tan solo **31** años de edad.

³ C.G.P Artículo 195. *Declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.*



AL HECHO TERCERO: No es cierto *"Para el año de 1981 el señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716, empieza a cotizar a pensión, según historia laboral (...)"* **toda vez** que de conformidad con la historia laboral la fecha de afiliación del demandante data del 19 de diciembre de 1995 y los aporte a la seguridad social en pensión iniciaron el 28 de febrero de 1984.

AL HECHO CUARTO: No me consta que *"A la fecha de hoy septiembre del año 2023 el señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716 sigue cotizando a rubro de pensiones a la Administradora de Fondos Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A por encontrarse como trabajador activo"* **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

AL HECHO QUINTO: No me consta que *"En el mes 09 del año 2000 el señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716, ante el boom, de la época y la creación de los fondos de pensiones privados, en la empresa donde trabaja, recibe la visita de COLFONDOS allí una asesora de este fondo privado llega hasta a la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, sitio en el cual trabajaba mi poderdante, el asesor le ofrece llenar una solicitud de vinculación al fondo de pensiones obligatorias COLFONDOS, en este caso, para la fecha año 2000. El asesor sin darles más explicaciones, ni informaciones que las que contenía dicho formulario (solicitud de vinculación o traslado al fondo de cesantías y pensiones obligatorias) lo hace firmar dicho documento que en la parte inferior dice lo siguiente: "VOLUNTAD DE AFILIACIÓN-HAGO CONSTAR QUE LA SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, EXPONTANEA Y SIN PRESIONES MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LACOMPANIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES YQUELOS DATOSAQUÍREPORTADOS SON VERDADEROS"* **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, la entidad que represento desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se llevó a cabo dicho traslado, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

AL HECHO SEXTO: Parcialmente cierto que *"Curiosamente y simultáneamente COLPENSIONES le recibe cotización en el mes 10 del año 2000; así sucesivamente le reciben cotizaciones COLFONDOS Y COLPENSIONES hasta el mes 01 del año 2001. Por último, COLFONDOS queda solo recibéndole la cotización a pensión a partir del mes 03 del año 2001, hasta el mes 11 del año 2002, fecha en la cual opero el traslado a la*



ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A en el mes 12 del año 2002. Hasta la fecha, septiembre de 2023, el señor ARIEL DÍAZ PARAMO continúa cotizando a pensión". En lo que atinente a Colpensiones, la parte actora bien sea de manera directa o a través de su empleador hicieron cotizaciones a la entidad sin mediar afiliación para la fecha, razón por la cual tal y como puede observarse con la historia laboral, dichos aportes fueron devueltos por no estar afiliado al RPM que administraba el otrora ISS tal y como puede observarse:

890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200009	22/01/2016	941606702OJBK0	\$ 404.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200009	11/10/2000	51356002032232	\$ 404.000	\$ 54.800	\$ 54.800	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200009	22/01/2016	941606402OJBK1	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200009	09/10/2000	52040102045768	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200010	22/01/2016	941606902OJBK3	\$ 673.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200010	14/11/2000	51356002032966	\$ 673.000	\$ 91.400	\$ 91.400	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200010	22/01/2016	941606102OJBK2	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200010	09/11/2000	51166001047408	\$ 356.000	\$ 46.200	\$ 46.200	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200011	22/01/2016	941606702OJBK4	\$ 404.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200011	20/12/2000	51356002035756	\$ 404.000	\$ 55.100	\$ 55.100	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200011	22/01/2016	941606402OJBK5	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0	0	0	*** Aporte Devuelto ***

Impreso Por Internet el :

06-May-2024 a las 09:29:39

4 de 7



COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

C 14241716

ARIEL DIAZ PARAMO

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] JBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov	[44] Dias Rep.	[45] Dias Cot.	[46] Observación
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200011	11/12/2000	52040102047613	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	SI	200012	22/01/2016	941606102OJBK6	\$ 261.000	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	SI	200012	16/01/2001	51356002033518	\$ 261.000	\$ 31.500	\$ 0	R	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200012	22/01/2016	941606902OJBK7	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0	0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200012	28/12/2000	52040102048046	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200101	22/01/2016	941606602OJBK8	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0	0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200101	12/02/2001	52040102049257	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
28545239	MARIA LIGIA REYES DE RAMOS	SI	200307	22/01/2016	941606302OJBK9	\$ 110.670	\$ 0	\$ 0	0	0	0	*** Aporte Devuelto ***
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200307	21/08/2003	50058501028114	\$ 110.670	\$ 14.615	\$ 14.615	10	0	0	Pago aplicado al periodo declarado
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/09/2003	50058501028317	\$ 22.133	\$ 3.000	\$ 3.000	2	0	0	No Vinculado Traslado RAI
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/08/2023	9423004073LXYX	\$ 22.133	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/09/2003	94237020167936	\$ 22.133	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***

AL HECHO SÉPTIMO: No me consta que el "Señor juez al señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716, hace una petición a la Administradora de Fondos Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A con el fin de recibir información y el envío del formulario de traslado de fondo, le informan que dicho formulario, no aparece, y le hacen el cálculo de cuanto se ganaría por pensionarse a COLPENSIONES y comparan con lo que le darían en

*PROTECCIÓN sumas irrisorias además no le dan respuesta a la petición de trasladarse a COLPENSIONES" **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.*

AL HECHO OCTAVO: No me consta que *"Ante la no respuesta de PROTECCIÓN sobre el traslado de fondo hacia COLPENSIONES, eleva otra petición en ese sentido, y le informan le corresponde a COLPENSIONES tramitar ese traslado" **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.*

AL HECHO NOVENO: Es cierto que *"La solicitud de trasladarse de fondo de PROTECCIÓN A COLPENSIONES se le hace y la respuesta de Colpensiones es que no reúne las condiciones que la ley a estipulado para dicho traslado"*

AL HECHO DÉCIMO: No es un hecho que *"Negadas las peticiones de traslado por parte de PROTECCIÓN Y DE COLPENSIONES, hace que se vea en la necesidad señor Juez Laboral de acudir ante Usted para dicho traslado a COLPENSIONES se haga efectivo y no perder mi calidad de vida, ante el bajo ingreso en el cual quedaría mi mesada pensional con el fondo privado" **toda vez** que es una apreciación subjetiva que realiza la parte demandante encaminada a poyar sus pretensiones, mismas que son objeto de debate probatorio dentro del presente proceso.*

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: No me consta que *"Señor juez es de anotar que la vinculación al fondo de pensiones obligatorias se realizó con una apariencia de voluntad de afiliación, y que la vinculación y la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario o solicitud, el cual es una proforma, así lo aparenta, PROTECCIÓN S.A en ningún momento, ni en ninguno de los apartes de nos da a entender, que lo asentado en las solicitudes de vinculación a las Administradoras de Pensiones que aparece firmada por la aquí demandante, y que aunque su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", lo que aquí lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, que esa decisión de vinculación no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña" **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, la entidad que represento desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se llevó a cabo dicho traslado, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.*

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: No me consta que "*Señor Juez como Usted vera no proporcionaron ni lo han hecho a mi poderdante, la información completa y verídica; es decir en dicha información nunca las firma privadas de pensiones, PROTECCIÓN S.A, contemplo todas las etapas que se deben cumplir desde el inicio de la afiliación como hasta cuando se obtiene el derecho de disfrutar de la pensión, el engaño se da no solo por la falta de información en el formulario, si no en lo que el asesor de los fondos de pensiones privados no explica en su totalidad, más aun hoy en día, la información o doble asesoría no se la han proporcionado*" **toda vez** que este hecho hace alusión a terceros ajenos a Colpensiones, la entidad que represento desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual se llevó a cabo dicho traslado, por lo tanto esta afirmación deberá probarse conforme a lo preceptuado en el artículo 167 del C.G.P, pues le compete a la parte que alega un supuesto factico probar el mismo, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso.

III. A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones tanto declarativas como condenatorias de la parte demandante y en consecuencia solicito se absuelva a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** - de todas y cada una de las peticiones que en su contra se formulan, por las razones que se esgrimen en el capítulo de la oposición, hechos y razones de la defensa y fundamentos de las excepciones que se enuncia a continuación y se condene a la DEMANDANTE al pago de las costas incluyendo agencias en derecho.

FRENTE A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES

A LA PRETENSIÓN PRIMERA: Se presenta oposición frente a "*Teniendo en cuenta lo expresado en los fundamentos facticos se declare la ineficacia y nulidad del traslado de la afiliación actual del señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716 ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.*" **toda vez**, que el actor se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal "e" el cual establece que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltare 10 años para cumplir la edad de pensión, cuando radica solicitud de traslado por primera vez ante la entidad, el **12 de abril de 2023**, contando a dicha data con **60** años de edad.

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES no incumplió con ninguna obligación legal, por cuanto la afiliación se realizó en correcta forma, tal cual como lo indica el artículo 2 de la ley 797 de 2003 la cual modifico el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su literal e:

"Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".

También es importante que se garantice la estabilidad financiera del RPM que administra Colpensiones en los términos de la sentencia de la Honorable Corte Constitucional **SU-107 DE 2024**, esto es, *"que desde la perspectiva constitucional, derivada del Acto Legislativo 01 de 2005, sobre el anterior argumento habría que reiterar dos cuestiones. **La primera**, es que, como ya se ha sugerido, la afectación a la sostenibilidad financiera del RPM no está dada en el corto plazo, sino en el mediano y largo. En efecto, nunca el valor que la AFP traslada a Colpensiones por razón de la declaratoria de la ineficacia de un traslado (así se incluyan valores como el porcentaje destinado a gastos de administración, el pago de primas o los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, entre otros) será suficiente para financiar una prestación en el RPM. Y no lo será porque el RPM tendrá que financiar el subsidio a pensiones con altos ingresos en su base de cotización. Y la financiación será más elevada en la medida en que el monto de la mesada crezca. **La segunda**, es que la argumentación de la Corte Suprema de Justicia pasa por alto la regla que limita los traslados entre regímenes, impidiendo que estos se lleven a cabo si al afiliado le restan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión. Esa regla tiene un fundamento técnico y financiero, dirigido precisamente a proteger la sostenibilidad financiera del sistema. En efecto, la regla de los 10 años ha procurado garantizar una adecuada responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos del RPM".*

A la PRETENSIÓN SEGUNDA: Se presenta oposición frente a *"Como consecuencia de la ineficacia y nulidad de la afiliación a ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A; Se ordene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES aceptar y recibir el traslado de los aportes y a activar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida, régimen al cual pertenecía"* **toda vez,** que el actor se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal "e" el cual establece que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltare 10 años para cumplir la edad de pensión, cuando radica solicitud de traslado por primera vez ante la entidad, el **12 de abril de 2023**, contando a dicha data con **60** años de edad.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; Indicó claramente lo siguiente:

(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media

con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)"

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado:

"El juez constitucional no puede ser ajeno al hecho de que una afectación grave de los ingresos y recursos del sistema de seguridad social no sólo perjudica la estabilidad financiera de la entidad administradora, sino también los derechos prestacionales de sus afiliados (...)"

En reciente sentencia, la Honorable Corte Constitucional **SU-107 DE 2024**, indicó "que desde la perspectiva constitucional, derivada del Acto Legislativo 01 de 2005, sobre el anterior argumento habría que reiterar dos cuestiones. **La primera**, es que, como ya se ha sugerido, la afectación a la sostenibilidad financiera del RPM no está dada en el corto plazo, sino en el mediano y largo. En efecto, nunca el valor que la AFP traslada a Colpensiones por razón de la declaratoria de la ineficacia de un traslado (así se incluyan valores como el porcentaje destinado a gastos de administración, el pago de primas o los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, entre otros) será suficiente para financiar una prestación en el RPM. Y no lo será porque el RPM tendrá que financiar el subsidio a pensiones con altos ingresos en su base de cotización. Y la financiación será más elevada en la medida en que el monto de la mesada crezca. **La segunda**, es que la argumentación de la Corte Suprema de Justicia pasa por alto la regla que limita los traslados entre regímenes, impidiendo que estos se lleven a cabo si al afiliado le restan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión. Esa regla tiene un fundamento técnico y financiero, dirigido precisamente a proteger la sostenibilidad financiera del sistema. En efecto, la regla de los 10 años ha

⁴ Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.



UT 2023 *procurado garantizar una adecuada responsabilidad fiscal en el manejo de los recursos del RPM".*

A LA PRETENSIÓN TERCERA: Se presenta oposición frente a *"Como consecuencia de la nulidad y de la conducta indebida de ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A se condene a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes y sus rendimientos que tengan a favor del demandante, ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C."* **toda vez,** que el actor se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal "e" el cual establece que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltare 10 años para cumplir la edad de pensión, cuando radica solicitud de traslado por primera vez ante la entidad, el **12 de abril de 2023**, contando a dicha data con **60** años de edad.

A LA PRETENSIÓN CUARTA: Se presenta oposición frente a *"como consecuencia se ordenará a Colpensiones aceptar y recibir el traslado de los aportes y a activar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida; de ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A."* **toda vez,** que el actor se encuentra inmerso en la prohibición legal establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal "e" el cual establece que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltare 10 años para cumplir la edad de pensión, cuando radica solicitud de traslado por primera vez ante la entidad, el **12 de abril de 2023**, contando a dicha data con **60** años de edad.

A LA PRETENSIÓN QUINTA: Se presenta oposición frente a *"se condenará teniendo en cuenta la ineficacia y nulidad del traslado de la afiliación del señor ARIEL DÍAZ PARAMO mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.241.716 con ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A a lo ultra y extra petita".* Se solicita al señor Juez absolver a Colpensiones de las costas y agencias toda vez que la entidad que represento ha actuado en estricto cumplimiento del orden legal, y teniendo en cuenta, el artículo 48 inciso 5 de la Constitución Política, y artículo 365 numeral 5 del C.G.P., **lo anterior,** teniendo en cuenta el principio de consonancia afectaría pues en el campo de la controversia jurídica; no les es dado al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de modificaciones a las pretensiones en oportunidades diferentes a las previstas legalmente, so pena de incurrir en vulneración de dicha garantía. E igualmente atendiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia plasmado en sentencia CSJ SL913 del 2013, donde manifestó que: "dicha facultad extra petita no es absoluta y encuentra un límite tratándose de prestaciones que no fueron objeto de la reclamación administrativa..."

A LA PRETENSIÓN SEXTA: Ni me opongo ni me allano a que *"se condenará*





ADMINISTRADORA DE FONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A pagar las costas y agencias procesales" **toda vez** que es una pretensión dirigida exclusivamente en contra de la AFP PROTECCIÓN.

IV. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Se advierte en el presente caso que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, especialmente la relacionada con que COLPENSIONES acepte la vinculación del DEMANDANTE, al sistema de seguridad social de prima media con prestación definida por lo siguiente:

El problema jurídico gira en torno a establecer si el acto jurídico de traslado de régimen del señor **ARIEL DIAZ PARAMO** del otrora ISS hoy Colpensiones hacia el RAIS **AFP COLFONDOS (integrado al proceso en calidad de litisconsorte) y AFP PROTECCIÓN S.A.** se debe declarar ineficaz o nulo, consecuentemente si se debe condenar a dicho fondo privado a trasladar a Colpensiones todos los aportes y sus rendimientos que tengan a favor del demandante, ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C; así mismo, si debe ordenarse a Colpensiones aceptar y recibir el traslado de los aportes y a activar su afiliación al régimen de prima media con prestación definida.

Como puede observar con la documental obrante en el expediente, la parte actora, radica por primera vez solicitud de traslado de régimen ante COLPENSIONES el día **el 12 de abril de 2023**, contaba con **60** años de edad, solicitud que fue despachada desfavorablemente por Colpensiones el mismo día por considerar que se encontraba a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse, el mismo día le fue otorgada respuesta de manera negativa, lo anterior conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 13 literal B.

Al respecto, conforme al 2 de la Ley 797 de 2003, la cual modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993: "después de un (1) año de vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión". y tampoco cumple los requisitos señalados en las sentencias SU-062 DE 2010 y SU-130 de 2013.

También se observa que la DEMANDANTE no hizo uso de los derechos de los afiliados, esto es, el retracto, el cual le da al afiliado la posibilidad de dejar sin efecto su elección, ya sea del régimen pensional o de administradora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquél haya manifestado por escrito la correspondiente selección.



Frente al tópic de las expectativas legítimas⁵ la Corte Constitucional en las **sentencias C-789 de 2002** denominó sobre la existencia de una posición jurídica llamada expectativa legítima que otorga a sus beneficiarios una particular protección frente a cambios normativos que menos cavan las fundadas aspiraciones que están próximos a reunir los requisitos de reconocimiento de un derecho subjetivo, en esta sentencia la Corte Constitucional puntualizó que:

"El establecimiento de regímenes de transición representa uno de los instrumentos de salvaguarda de las expectativas legítimas, pues no resulta constitucionalmente admisible que una persona que ha desplegado un importante esfuerzo en la consecución de un derecho y se encuentra próxima a pensionarse vea afectada su posición de forma abrupta o desproporcional" Específicamente creó *"la creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por transito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima para adquirir ese derecho por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse en el momento del tránsito legislativo"*

También en la **sentencia T-832A de 2013**, se explicó:

*"Las expectativas legítimas se ubican en una posición intermedia entre las meras expectativas y los derechos adquiridos, las tres figuras hacen alusión a la posición fáctica y jurídica concreta en que podría encontrarse un sujeto frente a un derecho subjetivo. Una persona tiene un **DERECHO ADQUIRIDO** cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento del mismo, estará ante una **MERA EXPECTATIVA** cuando **no reúna ninguno de los presupuestos de acceso a la prestación** y tendrá una **EXPECTATIVA LEGITIMA**, un derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de la satisfacción de **alguno de los requisitos relevantes del reconocimiento del derecho** subjetivo"*

De otro lado, la Jurisprudencia de esta corporación ha señalado que:

1. Las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos.
2. Los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber ingresado al patrimonio del titular, y
3. Las expectativas legítimas son merecedoras de una protección intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

De igual manera:

⁵ Ley 153 de 1887 ARTÍCULO 17. Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule ó cercene.

1-. Por no reunir los requisitos legales para regresar al régimen de prima media con prestación definida.

La DEMANDANTE no está amparado por el régimen de transición y por lo tanto no puede regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, debió hacerlo cuando le faltaran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión, pero como la primera solicitud la elevo cuando tenía **47 años**, es decir a menos de 10 años para alcanzar el requisito de la edad para adquirir el estatus pensional, por lo que ya no puede regresar al régimen administrado por COLPENSIONES.

Al respecto tenemos que, para la conservación del régimen de transición en los casos de traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se debe observar lo establecido en sentencia **C-789 de 2002**, en concordancia con el **Decreto 692 de 1.994**, el **Decreto 3995 de 2008**, y especialmente la sentencia **su 062 de 2010**, razón por lo que debe exigirse:

- a.) Haber cotizado durante 15 años o más al entrar en vigencia el sistema general de pensiones, es decir 1 de abril de 1.994, la anterior fecha puede variar a 30 de junio de 1.995, o a la fecha de entrada en vigencia de la entidad territorial, según corresponda, en caso de servidores públicos del orden territorial.
- b.) Se traslade al régimen de prima media todo el ahorro que el asegurado había efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad incluidos los rendimientos obtenidos en el RAIS.
- c.) En el traslado de los recursos del RAIS, se deberá incluir el porcentaje correspondiente al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS.
- d.) Dicho ahorro no será inferior al monto total del aporte legal correspondiente al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS.

Es requisito fundamental acreditar 15 años de cotizaciones al 1º de abril de 1994, para conservar el régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1.993, de suerte que solo los afiliados con más de 15 años cotizados al 1º de abril de 1994 no pierden los beneficios del régimen de transición al trasladarse al régimen de ahorro individual y, por lo tanto, pueden regresar en cualquier tiempo al régimen de prima media para hacer efectivo tal beneficio.

De otro lado, en la sentencia de unificación de jurisprudencia, la Corte Constitucional señaló que los interesados deberán trasladar a este régimen la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, la cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal,

en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

Si esta equivalencia no es posible, conforme quedó definido en la sentencia C-062 del 2010, el afiliado tiene la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir el requisito.

La corporación determinó que la medida no aplica para quienes son beneficiarios del régimen de transición por edad (35 años o más para las mujeres y 40 años o más para los hombres, al 1º de abril de 1994). A la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, al 1º de abril de 1994.

En esta categoría de afiliados, el traslado genera la pérdida automática del régimen de transición.

Sobre el tema en particular la sala de casación laboral desde la sentencia **CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 27465**, tiene adoctrinado que el régimen de transición no se recupera por razón de la edad, pues la única posibilidad permitida es por razones del tiempo de servicios al tener 15 años de servicios cotizados, pronunciamiento que fue reiterado recientemente en las sentencias **CSJ SL5339-2016, CSJ SL029-2018, y CSJ SL 2767-2018**⁶ así:

"Es doctrina de la Corte que para efectos de recuperar la transición sólo hay lugar a ella por razón del tiempo de servicios y no por la edad. Por ejemplo, en sentencia CSJ SL del 10 de agosto de 2010, rad. 37174, se razonó:

(...) El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció dos formas de acceder al régimen de transición consagrado en esa disposición: edad o tiempo de servicios. Esas condiciones fueron disyuntivas: la una o la otra, permitían el amparo del régimen.

Se previó entonces, que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 35 ó más años de edad en el caso de las mujeres, y 40 ó más años de edad en el de los hombres; o 15 ó más años de servicios cotizados podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha.

*Ahora bien, la norma en comento en **los incisos 4º y 5º estableció que el régimen de transición se perdía por el traslado al régimen de ahorro individual**, caso en el cual dichas personas quedarían sujetas a las condiciones previstas para ese régimen.*

No obstante, en aquellas hipótesis en que el afiliado beneficiario del régimen de transición luego del traslado al régimen privado, decide retornar al de prima media, de conformidad

⁶ Ver sentencia SL 2767 del 11 de julio de 2018 Radicación N° 59536, Acta 22 Magistrado Ponente Ernesto Forero Vargas, Demandante Beatriz Elena Chalarca Estrada Vs Colpensiones y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías. S.A

con los citados incisos recupera la transición, **siempre y cuando hubiera adquirido los beneficios del régimen en razón del tiempo de servicios o número de cotizaciones, esto es, haber prestado servicios o cotizado por 15 o más años con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.**

La Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles en forma condicionada los incisos en referencia, con el alcance de que para recuperar el régimen de transición quienes accedieron a él por haber cumplido 15 ó más años de servicios o cotizaciones, y retornen al régimen de prima media, debían cumplir además dos requisitos adicionales:

a) que se trasladara a prima media todo el ahorro que efectuaron en el régimen de ahorro individual.

b) que dicho ahorro no fuere inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

Se ha de señalar que la posibilidad de retorno al régimen de prima media está dada para las personas beneficiarias del régimen de transición, lo cual fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2004 al fijar los alcances de la decisión de exequibilidad del artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y que prevé que un año después de la entrada en vigencia de dicha normatividad, a quienes les faltare diez años o menos para cumplir la edad exigida para adquirir el derecho a la pensión de vejez, no podían trasladarse de régimen. Precisó la Alta Corporación que esta limitante no operaba para los beneficiarios del régimen de transición.

(...) el Tribunal incurrió en una imprecisión al considerar que se recuperaba el régimen de transición una vez se daba el retorno a régimen de prima media, cuando se tuviere el requisito de 15 años de cotizaciones con anterioridad al traslado al régimen de ahorro individual.

Tal como arriba se señaló lo importante para los efectos que aquí se analizan es haber cotizado o prestado servicios por 15 o más años, pero no con anterioridad al traslado de régimen pensional sino a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Sin embargo, se ha de advertir, que la equivocación del Tribunal resulta intrascendente para efectos de esta decisión, pues es claro que la accionante a 1° de abril de 1994 fecha de entrada en vigor para ella del sistema de pensiones, acreditaba más de 20 años de cotizaciones; en esa medida al retornar al régimen de prima media recuperó los beneficios del régimen de transición, por lo que no le asiste la razón al censor cuando pregona que en este caso el régimen de transición se había perdido.

En cuanto el actor era beneficiario del régimen de transición en razón del tiempo de servicios, para nada interesa el aspecto de la edad, por lo que el error de hecho que se le atribuye en la sentencia en el cargo tercero resulta inane para los efectos de esta decisión.

Recientemente, la Sala en fallo CSJ SL, 22 jul. 2015, rad. 46380, expuso:

Ahora, si lo que se quiere es afirmar que la tesis del Tribunal es contraria a la sostenida por la jurisprudencia constitucional, debe precisarse que el criterio unificado y actual de la Corte Constitucional es que «únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse "en cualquier tiempo" del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición» (SU-130/2013); el cual se acompasa con el de esta Corporación vertido en las sentencias CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 27465, CSJ SL, 10 ago. 2010, rad. 37174, CSJ SL, 23 oct. 2012 y, más recientemente, en la CSJ SL563-2013.

Además, en caso de que deseen retornar al régimen de prima media, por considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltan 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, en virtud la exequibilidad condicionada del **artículo 13 de la ley 100 de 1993, declarada en la sentencia C-1024 del 2004. (Corte Constitucional, sentencia SU -130, Mar. 13/13, Gabriel Eduardo Mendoza).**

2.- Por no adolecer la afiliación de causal de nulidad.

El artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo.

En sentido estricto, el error se puede definir diciendo que es la falsa noción de la realidad o en la discrepancia entre una idea y la realidad que esta pretende representar y por tanto debe determinarse con absoluta claridad si al momento de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, al demandante se le indujo en error para que suscribiera los documentos necesarios para el traslado del régimen al que venía afiliado y, si dicho error conforme al Código Civil es generador de nulidad, toda vez que no todo error que cometan los agentes repercute sobre la eficacia de los actos jurídicos, sino solamente aquel, que real o presuntamente, llegue a convertirse en el móvil determinante de la voluntad, o sea, en la causa de la prestación de dicha voluntad, pues según al artículo 1524 del mismo ordenamiento señala que no puede haber obligación sin causa real y lícita.

Vistos los hechos de la demanda fácil es concluir que en el presente asunto no se da el vicio del consentimiento alegado por error, toda vez que el mismo no tiene la fuerza legal para repercutir sobre la eficacia jurídica del acto jurídico celebrado entre **LA PARTE**



DEMANDANTE y LA AFP COLFONDOS Y PROTECCIÓN S.A. por no tratarse de un error dirimente o error nulidad, que es aquel que, por esencial, afecta la validez del acto y lo condena a su anulación o rescisión judicial.

Conforme a lo anterior no estamos frente a lo consagrado en el artículo 1740 del Código Civil, el cual establece que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, en este caso el consentimiento.

No obstante, la nulidad no se alegó dentro del término a que se refiere el artículo 1750 del Código Civil, norma que señala que el plazo para pedir la rescisión durara cuatro años, los cuales se contarán, en el caso de error o de dolo desde el día de la celebración del acto o contrato y si el traslado del régimen con la **AFP COLFONDOS Y PROTECCIÓN S.A.**, el traslado se dio en el año **2001** la nulidad debió haberse pedido antes del año **2005**.

Debe igualmente el despacho debe tener en cuenta que si existió la nulidad alegada la misma fue saneada en los términos del artículo 1752 del Código Civil, el cual dispone que la ratificación expresa o tácita puede sanear el vicio del contrato y, en el presente asunto EL DEMANDANTE saneó la nulidad por la ratificación tácita que autoriza el artículo 1754 ibidem, al ejecutar de manera voluntaria lo acordado en el contrato que autorizo el traslado de régimen en su momento, ello si se tiene en cuenta que el DEMANDANTE durante todo este tiempo (diligenciamiento del formulario de cambio de régimen hasta la fecha de presentación de la demanda), ha consentido en que se le hagan los descuentos respetivos con destino al ahorro individual.

Ahora bien, en cuanto a la viabilidad de declaratoria de la nulidad del traslado cuando las administradoras de los fondos de pensiones faltan a su deber de información de manera completa los riesgos de un cambio de régimen, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en las **sentencias Nos. 31989 del 9 de septiembre 2008, 33083 del 22 de noviembre y 31314 del 6 de diciembre de 2011**, y algunas más recientes se ha pronunciado al respecto que en los casos decididos por el órgano de cierre, en favor de los allí demandantes, se analizaron situaciones referentes a personas trasladadas cuyo perjuicio frente a los beneficios del régimen de transición eran palmarios, así:

1. En la **sentencia 31989 del 09 de septiembre de 2008** al momento del traslado al RAIS, el actor ya había cumplido 55 años de edad y contaba con 20 años de servicio, por lo que había causado el derecho a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985. *"Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de*



disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención”.

2. En la **sentencia 33083 del 22 de noviembre de 2011**, cuando el DEMANDANTE se trasladó del régimen de prima medida con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, contaba 58 años de edad y tenía una densidad aproximada de 1286 semanas cotizadas, por lo que estaba a 2 años de consolidar su pensión de vejez, ya que contaba con los aportes suficientes para acceder a la prestación económica. *"es claro que tenía una expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS, por estar próximo a cumplir los requisitos que disponen sus reglamentos.*

En las anteriores circunstancias, es evidente que un afiliado de las características del DEMANDANTE tiene mayores beneficios permaneciendo en el régimen de prima media con prestación definida, en cuanto conserva su transición, que trasladándose al de ahorro individual con solidaridad que administran los Fondos Privados de Pensiones, máxime que en este caso, el actor estaba a escasos 2 años para consolidar su pensión de vejez, ya que tenía las semanas suficientes para acceder a dicha prestación económica."

3. En la **sentencia 31314 del 06 de diciembre de 2011**, el afiliado tenía más de 62 años de edad y se había desempeñado durante más de 19 años y 6 meses como servidor oficial en diversas entidades, cuando diligenció el formulario de traslado a la AFP, por lo que también estaba muy cercano a cumplir el tiempo de servicio requerido para obtener la prestación vitalicia. *"Esos datos atinentes a la edad del accionante, nacido en octubre de 1934 y al tiempo de servicios desarrollado en el sector oficial, por 19 años y 6 meses, los suministró el accionante al Fondo de Pensiones demandado, según se lee en los formularios de folios 14 y 20 del expediente, es decir, que la Administradora demandada, admitió una afiliación de una persona en las reseñadas condiciones, sin enterar al interesado de las reales circunstancias pensionales del régimen de ahorro individual y con consecuencias frente a la dejación del de prima media con prestación definida que traía en la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, amén de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993."*

4. **Sentencia SL 12136 del 3 de septiembre de 2014**, con ponencia de Elsy del Pilar Cuello Calderón, en este caso el demandante nació el 22 de octubre de 1947, por lo cual cumplió 60 años la misma fecha del año 2007 y se trasladó al RAIS en febrero de 2000 cuando le faltaban menos de 7 años para cumplir la edad pensional, y regreso al RPM en 1 de enero de 2001, sin embargo demandó la pensión con régimen de transición, por lo cual este precedente no es aplicable al caso en concreto.

5. En la **sentencia SL 19447 del 27 de septiembre de 2017** con ponencia de Gerardo Botero Zuluaga, en este caso el DEMANDANTE nació 25 de enero de 1944 y se trasladó en 2 de mayo de 2001 a la AFP cuando ya contaba con 57 años de edad, esto quiere decir que

ya tenía un derecho adquirido al momento del traslado, en la cual la Corte precisó: *“Esa lectura equivocada de las pruebas denunciadas, y que atrás se estudiaron, conllevó a que el juzgador desconociera además que el artículo 11 de la pluricitada ley 100 respete los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos a quienes estén pensionados o hayan cumplido los requisitos, como es el caso de la accionante; de allí que no fuera cierta la afirmación según la cual no existía limitación legal de traslado a quienes ya tuviesen acreditadas las exigencias, menos cuando el mismo afectaba directamente a la afiliado e incluso, bajo la tesis que aquel expuso, la ponían en función de cotizar mínimo 500 semanas adicionales que exigía el artículo 61, lo cual es arbitrario si se tiene en cuenta que el derecho ya estaba consolidado”*

6. En la **Sentencia SL 17595 del 18 de octubre de 2017** con ponencia del Magistrado Fernando Castillo Cadena, en este caso el DEMANDANTE nació el 1 de agosto de 1947 y se trasladó en febrero de 2000 a la AFP cuando ya contaba con 53 años de edad y 835 semanas cotizadas al ISS pues se afilió el 22 de abril de 1974, y la corte manifestó en esta oportunidad *“máxime que, en este asunto, se reitera, están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen”*
7. Recientemente en sentencia **SL 4989 del 14 de noviembre de 2018**, con ponencia del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, se estudio el caso de una persona: *“el DEMANDANTE se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, contaba 57 años de edad, tenía una densidad de cotizaciones aproximada de 563 semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, según su historia laboral de folio 122; luego, es claro que ya tenía cumplidos los requisitos dispuestos por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder al derecho a la pensión de vejez a cargo del ISS.”* Razones estas por las cuales sigue sin existir un precedente⁷ consolidado para el caso sub examen.

⁷ Sentencia Corte Constitucional T- 698 de 2004 Mp Dr. Rodrigo UPRIMNY YEPES en donde manifestó: (...) b) El recurso de casación, en el mismo sentido, tiene por objeto principal la **unificación de la jurisprudencia judicial** y proveer la realización del derecho objetivo. En ese orden de ideas, es evidente que durante un recurso de casación la **Corte Suprema de Justicia, como vértice de la jurisdicción ordinaria**, puede revisar la interpretación propuesta por los juzgados y tribunales en un caso concreto y fijar así una doctrina, que en principio será un elemento de unificación de la interpretación normativa. Si bien, ese criterio o precedente puede ser refutado o aceptado por el juzgado de instancia, lo claro es que no puede ser desoído abiertamente en **casos iguales**, sino que debe ser reconocido y/o refutado por el juez de instancia o tribunal, bajo supuestos que veremos más adelante. (...) En el caso de los Tribunales, esta Corporación ha manifestado que como órganos jerárquicamente superiores en el nivel correspondiente, **asumen igualmente la tarea de unificar la jurisprudencia dentro de su jurisdicción**. De allí que la función de unificación jurisprudencial les es oponible en aquellas áreas en las que la Corte Suprema de Justicia, no ejerce por razones legales, esa competencia. En ese sentido, esta Corte ha considerado que les son aplicables las reglas sobre precedente y doctrina probable, en la medida en que para lograr la igualdad de trato y la aplicación correcta del derecho, la unificación de jurisprudencia es indispensable también a ese nivel.”

8. En sentencia SL 1452 del 3 de abril de 2019 con radicado 68852 con ponencia de la H. Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde la demandante nació el 3 de diciembre de 1953, por lo que a 1.º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; realizó aportes al ISS a partir del 1.º de febrero de 1971 y que el 1.º de julio de 1995 se trasladó al fondo de pensiones Porvenir S.A. y retornó al ISS el 16 de octubre de 2007, por lo que nos encontramos frente a una persona con una expectativa legítima.
9. En sentencia SL1421 del 10 de abril de 2019 con radicado 56174 con ponencia del H. Magistrado Gerardo Botero Zuluaga, donde el demandante 29 de diciembre de 1948 y que a 1º de abril de 1994, contaba con más de 45 años; que estuvo afiliada ininterrumpidamente al ISS desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el mes de julio de 1999; que el 1 de septiembre de 1999, se trasladó a PORVENIR S.A., para la fecha en que se produjo el traslado había cotizado más de 500 semanas comprendidas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento del requisito de edad, previsto en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para causar su derecho pensional. - tenía un derecho adquirido-

Es así, que de las referencias atrás citadas se puede deducir que los traslados se realizaron cuando ya estaba en la prohibición legal e igualmente, se pueden concluir que, para dichas personas, un cambio de régimen resultaba supremamente gravoso, puesto que eran beneficiarios de transición, ya habían consolidado su derecho y/o estaban muy cercanos a cumplir el requisito faltante para obtener la pensión, por lo que era innegable el deber de la AFP de presentar información no sólo correcta, sino también suficiente, sin embargo, para el caso en concreto no se encuentra inmerso en una de las situaciones anteriormente mencionado y de otro lado tampoco cuenta con una expectativa legítima según lo explicado por la jurisprudencia mencionada anteriormente, razón por la cual la posible falta de información en que pudo incurrir el fondo de pensiones no logra tener la identidad suficiente para configurar el engaño que a la postre invalide el cambio de régimen.

De otro lado, en sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro del proceso No. 2015-789 de conocimiento del Juzgado 5 Laboral del Circuito, la cual revocó la sentencia de primera instancia se pronuncia al respecto:

"La línea jurisprudencial en principio señala que la falta de información completa y comprensible al afiliado por parte de la administradora de pensiones puede configurar un engaño que conlleve a la anulación del traslado, sin embargo, a juicio de esta sala de forma mayoritaria estas providencias resaltan condiciones o expectativas legítimas pensionales de los demandantes al momento del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual en la medida que la información del traslado resultaba trascendental por cuanto los afiliados o bien habían consolidado el derecho a pensionarse según las normas de régimen de transición o cumplían uno de los requisitos en ello señalados, situaciones en las

que el fondo de pensiones debe anteponer sus intereses las de lograr un afilado más”.

Sobre dicho deber de información, en **sentencia SL 12136 – 2014 del 3 de septiembre de 2014, radicación 46292**, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que, al momento de resolver sobre viabilidad de la aplicación del régimen de transición ante la existencia de un traslado, es imperativo para el Juez, además de verificar los requisitos, verificar si el traslado se realizó bajo los parámetros de libertad informada, pues en su sentir:

"Solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de determinar si hubo eficacia en el traslado, lo que es relevante para entrar a fijar la pérdida o no de la transición normativa. Al juzgador no le debe bastar con advertir que existió un traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, sino que es menester, para la solución, advertir que la misma es válida, lo cual resulta un presupuesto obvio, máxime cuando esta Sala ha sostenido que el régimen de transición no es una mera expectativa.

(...)

Para este tipo de asuntos, se repite, tales asertos no comprenden solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos (prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad), sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Esas reglas básicas, permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia, y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable”.

Sentencia C-086 de 2016:

7.3.- En definitiva, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2001) introdujo en el ámbito legal la institución de la carga dinámica de la prueba, que no estuvo presente en el anterior Código de Procedimiento Civil^[111]. Es en este escenario en el cual se enmarca la norma parcialmente acusada y que ahora es objeto de examen:

"ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

*No obstante, según las particularidades del caso, el juez **podrá**, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier*

momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba". (Se resalta la expresión demandada)

Fue decisión consciente y deliberada del Legislador mantener como principio general de la carga de la prueba el onus probandi, según el cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". En breves líneas, su alcance ha sido explicado por la jurisprudencia en los siguientes términos:

"Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: 'onus probandi incumbit actori', al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; 'reus, in excipiendo, fit actor', el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, 'actore non probante, reus absolvitur', según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción"[\[112\]](#).

Sin embargo, este postulado no es absoluto por cuanto admite al menos dos excepciones que la misma ley contempla, a saber: (i) la carga dinámica de la prueba y (ii) los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas.

La acreditación de los hechos (de acción o de excepción) es una carga procesal que bien puede ser asignada a las partes que los invocan. En efecto, sobre la base de que el ejercicio de cualquier derecho implica responsabilidades –el acceso a la administración de justicia es uno de ellos–, esta exigencia no es sino una manifestación concreta del deber general previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, de "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia".

A juicio de la Corte el principio del onus probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en el Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer los

derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo.

Es también una carga adecuada para lograr esos mismos cometidos, si se tiene en cuenta que quien invoca un hecho lo hace –lo debe hacer- sobre la base de un conocimiento previo del mismo y por lo general dispone de algunos elementos mínimos para dar crédito a sus afirmaciones, en especial cuando pretende obtener algún beneficio de ellos; igualmente, contribuye eficazmente con el juez en su tarea de dilucidar la verdad, garantizar la primacía del derecho sustancial y resolver los litigios dentro de un término razonable (celeridad).

Además, tal exigencia no resulta desproporcionada precisamente porque el propio ordenamiento ha previsto algunas excepciones para aquellos eventos en los cuales la prueba es superflua (hechos notorios), o cuando una persona enfrenta serias dificultades para demostrar un hecho, por ejemplo por razones lógicas (afirmaciones y negaciones indefinidas), técnicas (cuando se requiere conocimientos especializados), económicas (costo significativo) o incluso jurídicas (acceso restringido a la información), entre otras.

7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios – algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la "longa manus" del juez para restablecerla.

Es importante recordar que la intervención del juez en la distribución de las cargas probatorias no tiene cabida únicamente en ejercicio de sus poderes oficiosos para decretar y practicar pruebas. En efecto, la norma permite que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez, ante la cual el funcionario judicial debe inexorablemente pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para rechazarla.

En este punto la Corte precisa que cuando la norma señala que la decisión del juez "será susceptible de recurso", significa que podrá ser recurrida tanto la decisión que accede como la que niega la solicitud de distribución de la carga probatoria, y por supuesto aquella producto del ejercicio oficioso del juez. Esta hermenéutica es coherente con la vocación de control a la actividad judicial que quiso imprimir el Legislador cuando hace uso oficioso de la carga dinámica de la prueba o cuando atiende o desestima la solicitud elevada por las partes.

Adicionalmente, la posibilidad de revisar dicha decisión permite a los sujetos procesales ejercer el derecho de contradicción y defensa e intervenir en condiciones de igualdad para debatir acerca de la razonabilidad o no de la distribución de cargas probatorias a las partes, de acuerdo con las especificidades de cada caso.

Visto lo anterior, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución) la Corte no advierte reparo constitucional alguno al hecho de que el Legislador haya autorizado al juez a distribuir la carga de la prueba entre las partes, según las particularidades del caso, para exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto el inexorable "deber" hacerlo en cada caso.

La Sala observa que la regulación está encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función del juez en el Estado Social de Derecho y el cumplimiento de las cargas procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando ponen en marcha la administración de justicia. Recuérdese que "la mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio se obtiene a partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de las partes –principio dispositivo– y el poder oficioso del juez –principio inquisitivo–, facultades de naturaleza distinta que operadas de forma coordinada deben concurrir en un mismo y único propósito: la solución justa y eficiente del proceso"¹¹³¹.

Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar

esa tarea únicamente al juez.

Con todo, en este punto es necesario aclarar que la norma acusada no puede ser interpretada al margen de los fines y principios que orientan el Código General del Proceso y que por lo mismo tienen fuerza vinculante. Ello significa que el juez, como director del proceso, ha de estar vigilante para dar cumplimiento a su misión en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, ya sea al acudir a sus atribuciones oficiosas en el decreto y práctica de pruebas, o bien para hacer una distribución razonable de la carga probatoria según la posición en la que se encuentren las partes en cada caso.

En este sentido, el artículo 2º del código reconoce el derecho que toda persona tiene "a la tutela judicial efectiva" para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, "con sujeción a un debido proceso de duración razonable", lo que reafirma la competencia del juez para asumir un rol activo en el proceso y lograr la búsqueda de la justicia material. El artículo 4º consagra el principio de igualdad, según el cual "el juez deber hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes"; ello supone abandonar una visión estrictamente formalista de la posición de las partes en el proceso para hacer uso de las facultades oficiosas y restablecer el equilibrio o distribuir las cargas probatorias cuando las circunstancias así lo demanden. El artículo 7º reitera la sujeción de los jueces al imperio del Derecho, lo que incluye la obligación de tener en cuenta la jurisprudencia y la doctrina probable incluso en lo relativo a la carga dinámica de la prueba; así como la obligación de "exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos" en caso de apartarse de la doctrina probable en la materia o de cambio de criterio en casos análogos. El artículo 11 exige al juez interpretar las normas procesales teniendo en cuenta "que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial". Por último, el artículo 12 señala que los actos procesales se realizarán "con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial".

De esta manera, para la Corte es claro que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erige en un verdadero deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba. De hecho, para tal fin también se han diseñado diversos recursos y mecanismos de control al interior de cada proceso, e incluso excepcionalmente podrá hacerse uso de mecanismos extraordinarios como la acción de tutela, lo cual ha sido avalado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia constitucional.

Sentencia C-596 DE 1997:

4.2 Derechos adquiridos y expectativas de derecho en materia de seguridad



Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho.

Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores ; no así las simples expectativas de derecho.

Para el caso concreto de las personas a las que se refiere la norma demandada, esto es las personas beneficiarias del régimen de transición al que se ha hecho referencia en esta Sentencia, resulta evidente que, por cuanto ellas, al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 no habían cumplido aún con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez por el régimen pensional al cual estuvieran afiliadas, no habían adquirido ningún derecho en tal sentido, y sólo tenían al respecto una expectativa de derecho.

En relación con los beneficios derivados del régimen de transición a que se refiere el artículo 36 parcialmente demandado, y sobre el tema que ahora se analiza, esta Corporación, en Sentencia C-168 de 1995 (M.P. Doctor Carlos Gaviria Díaz), expuso los siguientes criterios :

"Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que da derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior, para las personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley.

"...

"Adviértase, cómo el legislador con estas disposiciones legales va más allá de la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la

pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.”

De esta manera, se encuentra ya definido por la Corte que el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no resulta lesivo de derechos adquiridos, sino que, al contrario, propugna por proteger lo que tan sólo son expectativas de derecho de ciertos trabajadores.

En fallo de segunda instancia dictado el pasado **14 de agosto de 2018** (en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y negar la nulidad de traslado) por parte Tribunal superior de Bogotá. Sala 4 de decisión conformada por **RINHA ESCOBAR BARBOSA (M.P), DAVID ALBERTO JOSE CORREA y DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN**, se manifestó:

(...) Sin embargo habrá de precisarse que en estas providencias al hacerse referencia a la plurimentada que es ineficacia el traslado siempre se trae a colación la existencia una expectativa legítima de pensionarse bajo un régimen anterior y que exigía de las respectivas administradoras demandadas la necesidad de que fuese informado al respectivo particular de esas consecuencias no beneficiosas en materia del monto de su pensión al perder el régimen de transición.

(...)

*se insiste a la buena fe seriedad y honestidad que debe Predicar el extremo en una relación contractual **REALMENTE ES PREOCUPANTE LA MASIVIDAD DE LAS PRESENTES ACCIONES QUE SÓ PRETEXTO DE UNA PRESUNTA FALTA DE INFORMACIÓN SUFICIENTE SE PRETENDE DEJAR SIN EFECTOS UNA DECISIÓN QUE HA SIDO CONSENTIDA DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA** no se comparte Entonces lo manifestado por el a-quo cuando acude a precedente jurisprudenciales cuyos supuestos fácticos resultan ser diametralmente diferentes a los hoy planteados ciertamente en el radicado 31314 se ventila el caso de una persona que al momento de traslado contaba con 62 años de edad y que había laborado 19 años al momento del traslado igual de imprecisa es la cita del radicado 33083 al que hace un momento hicimos referencia donde De igual forma se tratan supuesto estáticos dispares a los hoy puestos en consideración de esta sala de decisión en efecto en este pronunciamiento se hace referencia a una persona que pertenecía al régimen de transición que no es el caso del DEMANDANTE.*

(...)

Pensar lo contrario prácticamente sería exigir del fondo de pensiones privado un imposible Cuál es el imaginárselo salarios que permitían Establecer un monto mayor en el régimen de ahorro individual para que pueda exigírsele una proyección de una pensión de un afiliado o un afiliado cuando no se cuenta con información para ello;

Será prudente entonces suponer que la trabajadora que decidió su traslado siempre tendría el mismo ingreso o que su ingreso sería mayor y pues la respuesta es negativa a estos interrogantes porque de pensar ellos así sería autorizar a los juzgadores que edifiquen sus decisiones judiciales en suposiciones que contrarían nuestra seguridad jurídica y debido proceso.”

De lo anterior, se desprende que el DEMANDANTE no se encuentra inmerso en una de las situaciones como las analizadas anteriormente, razón suficiente para que no se declare la nulidad de afiliación pretendida.

3.- Respecto de la carga de la prueba.

En cuanto a la carga de la prueba tenemos que el artículo 167 del C.G.P, reza del siguiente tenor”

“Artículo 167: Carga de la Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen.”

En este sentido el Honorable tribunal en varios pronunciamientos ha puesto de presente este artículo, como en la sentencia con ponencia del **Magistrado Carlos Andrés Vargas del pasado 10 de octubre de 2017 proceso 19-2015-0915**, frente a la carga de la prueba en este tipo de proceso manifestó:

“Los vicios de error fuerza y dolo deben ser demostrados por las partes que las alegan y de manera alguna pueden trasladarse a la entidad la carga de demostrar que no actuó con dolo lo anterior de conformidad con el artículo 167 del CGP las partes tienen la obligación de probar los supuestos facticos en que fundan sus alegaciones según el extremo que ocupan.”

En el mismo sentido la sentencia con **radicado 07-2015-00822-01 con fecha del 25 de octubre de 2017** del Tribunal Superior de Bogotá Con ponencia del Magistrado Manuel Serrano Baquero en la que manifestó:

"Sobre vicios del consentimiento que ella presto al suscribir el traslado de régimen por error inducido o por dolo, estima la sala que no se aportaron pruebas pertinentes y suficientes por quien tenía la carga procesal; la parte demandante al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, se debe recordar además frente a los argumentos expuestos en esta audiencia que las consecuencias del traslado del régimen las definió la ley 100 claramente y por ello cualquier duda interpretativa de las normas constituía un error de derecho que no tenía alcance para viciar el consentimiento según lo dispone la artículo 1509 del Código Civil, menos aún para personas como el DEMANDANTE que efectuaron traslados sucesivos en el RAIS en diferentes administradores de fondos de pensiones, de

Por su parte el Tribunal Superior de Bogotá esta vez con ponencia del Magistrado Rafael Moreno Vargas, en sentencia del pasado 18 de enero de 2018 con radicación N° 07-2016-00069-01 hizo lo propio al sostener que:

“Con base en los argumentos expuesto la citada alta corporación en casos **Especialísimos** ordeno la nulidad de la afiliación y dispuso el retorno del afiliado del RAIS al régimen de prima media, en ellos ha hecho valer la inversión de la carga de la prueba al considerar que le corresponde a las AFP demostrar la debida diligencia en el suministro de una información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado en o al momento de la afiliación, pero se aclara por la sala que en dichas decisiones se advierte que se invierte la carga de la probatoria por el hecho de que los demandantes habían cumplido los derechos para adquirir una pensión con el régimen de transición o se encontraban muy cerca de consolidar el derecho pensional y así mismo ha procedido cuando con la decisión de traslado se cuarto o limito y restringió la posibilidad de acceder al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

De lo anterior se resalta que la **subregla de la inversión de la carga probatoria desarrollada en la jurisprudencia no se constituye como una regla probatoria de carácter general** y por lo tanto no se obliga aplicarla en todos los casos, sino que en cada caso particular debe advertirse tal situación, es decir que su eventual procedencia, pues en el caso que tal circunstancia no se presente, **deberá entonces el interesado si pretende la nulidad de afiliación probar que se incurrió en vicios del consentimiento advirtiendo que los hechos enrostrados** frente a la posibilidad de pensionarse antes de tiempo o que podía obtener la devolución de lo ahorrado en caso de no configurar el derecho pensional entre otros, no se constituyen en sí mismo como razón suficiente para demostrar la invalidación de la afiliación, pues no resultan en estricto sentido legal, falsedades o información errada pues justamente la ley 100 de 1993 creo al RAIS con esas características por lo que el sistema jurídico posibilita que ello sea así sin que por ello se configuren vicios del consentimiento que den lugar a la nulidad de traslado tal como lo ha considerado el magistrado ponente en múltiples oportunidades.”

Corte Constitucional Sentencia SU-107 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

La Corte Constitucional modula el precedente de la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.

La Corte Constitucional dispuso modular el precedente de la Sala de Casación Laboral de la



Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en los procesos ordinarios en los cuales se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida -en adelante, RPM-, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -en adelante, RAIS-, debido a problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.

La Corte Constitucional consideró que el precedente es desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009. La Corte consideró que de conformidad con la Constitución y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), así como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana crítica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.

La Corte Constitucional moduló el precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a la inversión de la carga de la prueba en este tipo de procesos. Para ello, ordenó que en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:

- (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.
- (ii) (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtención de pruebas acudiendo a las enlistadas en el Código General del Proceso, tales como "(...) la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes", y las demás que considere necesarias, pertinentes y conducentes.
- (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.
- (iv) (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los términos de los artículos 176

- (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posición de las partes, esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentrañar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos.

La Corte Constitucional hizo énfasis en que la inversión de la carga de la prueba no puede ser la primera o la única opción de la que puede hacer uso el juez, pues es necesario que se haga uso de las herramientas que conforme a las reglas del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP.

La Corte señaló que su decisión, que supone una modificación al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser extendida, con efectos inter pares y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su trámite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.

Conforme la jurisprudencia atrás citada la compete al aquí demandante demostrar el o los vicios del consentimiento alegado, no bastando para ello la siempre afirmación del DEMANDANTE.

Cabe advertir que resulta desproporcional, colocar la carga de la prueba en las AFP en el caso en particular en Colpensiones, que en los casos que se ha declarado la nulidad, es la más afecta en lo atinente a los sostenibilidad del sistema pensional, máxime cuando **la primera afiliación con la AFP COLFONDOS se dio en el año 2001 queriendo decir esto que ha transcurrido más de 20 años a la fecha**, configurándose imposible probar las circunstancias que rodearon la suscripción del traslado fecha para la cual no era obligatorio dejar un registro documental de la misma, por lo cual es completamente aplicable a estos casos el principio que reza "nadie está obligado a lo imposible"⁸.

⁸ Ver sentencia C- 010 de 2003 de la Corte constitucional: "Este principio ha sido aplicado por la Corte en varias oportunidades. Así por ejemplo, en la Sentencia C-337 de 1993 al declarar la exequibilidad parcial del artículo 107 de la Ley 21 de 1992, anual de presupuesto, consideró que por imposibilidad fáctica el Gobierno de ese entonces no estaba obligado a presentar ante el Congreso la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento del artículo 341 de la Carta. La Corte dijo en el citado fallo: "...resulta jurídicamente cuestionable exigirle en estos momentos al Gobierno que se someta a las normas constitucionales que se remiten a la existencia del mencionado Plan mediante su presentación al Congreso. Resulta, entonces, aplicable al caso sub-examine el aforismo que dice que **"nadie está obligado a lo imposible"**. Lo anterior se justifica por cuatro razones: "a) Las obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad, ya que operan sobre un plano real; de ahí que realizan siempre una acción o conservan una situación, según sea una obligación de dar o hacer -en el primer caso- o de no hacer -en el segundo-. Ese es el sentimiento de operatividad real de lo jurídico. **Lo imposible, jurídicamente no existe; y lo que no existe no es objeto de ninguna obligación; por tanto, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico.** b) Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, debe estar de acuerdo con sus capacidades; como lo imposible rebasa la capacidad del sujeto de la obligación, es desproporcionado asignarle a aquél una vinculación con un resultado exorbitante a su capacidad de compromiso, por cuanto implicaría comprometerse a ir en contra de su naturaleza, lo cual resulta a todas luces un absurdo. c) El fin de toda obligación es construir o conservar -según el caso- el orden social justo. Todo orden social justo se basa en lo existente o en la

En consecuencia, solicito se NIEGUEN las pretensiones de la demanda, acogiéndome para tal efecto a las anteriormente alegadas razones de la defensa.

4. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE NULIDAD O INEFICACIA DE TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRA PENSIONADAS EN EL RAIS.

Mediante sentencia SL 373 del 10 de febrero de 2021, con ponencia de la H. magistrada CALRA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, al respecto indico:

Ahora bien, aunque el cargo es fundado en cuanto a la inobservancia del deber de información, la Corte no casará la sentencia del Tribunal porque en sede de instancia llegaría a la misma conclusión absolutoria, pero por otras razones.

“Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes *y, además*, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del

probabilidad de existencia. Y como lo imposible jurídicamente resulta inexistente, es lógico que no haga parte del fin de la obligación; y lo que no está en el fin no mueve al medio. Por tanto, nadie puede sentirse motivado a cumplir algo ajeno en absoluto a su fin natural. d) Toda obligación jurídica es razonable. Ahora bien, todo lo razonable es real o realizable. Como lo imposible no es real ni realizable, es irracional, lo cual riñe con la esencia misma de la obligación. De acuerdo con lo anterior, es irracional pretender que el Estado deje de cumplir con los deberes esenciales a él asignados -que son, además, inaplazables- por tener que estar conforme con las exigencias de uno o varios preceptos constitucionales que, en estas circunstancias, resultan imposibles de cumplir. De manera que así como no puede cumplirse en este momento con el mandato contenido en el artículo 341 superior, por imposibilidad fáctica y jurídica, es cierto que, en cambio, el Estado debe procurar el cumplimiento de los deberes esenciales a su ser, que son, se repite, inaplazables, por cuanto la sociedad civil los requiere con urgencia”.

riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.

En el caso bajo examen, a Cárdenas Gil Protección S.A. le otorgó la pensión de vejez, en la modalidad de retiro programado, desde el año 2008, es decir, de manera anticipada. La pensión se financió con el bono pensional pagado el 19 de diciembre de 2008 por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por un monto de \$156.674.927. Estas circunstancias denotan que el demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado de manera anticipada, prestación que a su vez fue financiada con los recursos de su cuenta de ahorro individual y el bono pensional, de manera que no es factible retrotraer tales situaciones como se pretende.

A más, de las sentencias citada en la presente contestación donde varias salas de la H. Sala Laboral del Tribunal superior de **Bogotá y Medellín** tenemos que en casos como en el que



nos encontramos donde el demandante se encuentra pensionado dentro del RAIS, se configura la ratificación o saneamiento de la nulidad en los términos de las sentencias que se pasan a citar.

1. Sentencia del 05 de septiembre de 2018, del H. Tribunal Superior de Bogotá, sala Laboral. M.P Martha Ludmila Ávila Triana, dentro del proceso 22-2016-10, donde manifestó que:

"En el presente asunto no es posible aplicar el anterior criterio jurisprudencial, Pues nos encontramos frente a una situación fáctica diferente a la estudiada por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias que fijan el precedente respecto de este tema, pues conforme a las pruebas decretadas en esta instancia de las cuales ya se hizo referencia, la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda informa que emitió, expidió y negoció el bono pensional el cual se encuentra depositado el dinero en la cuenta de ahorro individual de la demandante pues se negoció y por eso se le concedió su pensión e hizo parte del capital para financiar su pensión y es con el cual como se dice se financia esta pensión de la demandante que viene percibiendo de la AFP, desde el 14 de noviembre de 2013.

*Ahora, a pesar de que la AFP no probó que brindó dicha asesoría en los términos que se han señalado en antelación; es decir que fue bajo la de manera veraz y oportuna frente a esas implicaciones que generaba en el año 98 ese traslado no es posible en este caso en particular declarar la nulidad del traslado al RAIS, pues con posterioridad al formulario de afiliación que firmó la demandante para trasladarse de régimen se evidencia una **serie de actuaciones por parte de la demandante con las cuales ratificó su intención de pertenecer al RAIS** tal y como lo dijo la apoderada de la AFP de Porvenir en su recurso y frente a los cuales no señaló que existiera ningún vicio de su consentimiento que pudiera afectarlos como son.*

Primero, a folio 157 aparece diligenciada la solicitud de emisión de Bono pensional que hizo la demandante a la AFP el 24 de noviembre de 2014.

Segundo, como lo acepta la demandante en el hecho 6.23 la AFP Porvenir S.A en febrero del 2015 le solicitó autorización para la negociación del Bono pensional.

Tercero, a folio 63 aparece diligenciada la solicitud de pensión de vejez que hizo la demandante a la AFP Porvenir S.A el 2 de octubre de 2013.

Cuarto, a folio 153 aparece que la demandante le informa a Porvenir S.A el 2 de octubre de 2013 que habiendo recibido la información suficiente sobre las modalidades de pensión previstas en la ley 100 del 93 decidió optar por el retiro programado.

Quinto, a folio 65 aparece oficio de la AFP Porvenir S.A en la que le informa a la demandante que ha sido aprobada su solicitud pensional y que le corresponde una mesada inicial a partir

Conforme a lo anterior, es claro que la que la demandante se encontraba informada de cómo sería su pensión en el RAIS, pues en ningún momento manifestó que al solicitar la pensión de vejez por la modalidad de retiro programado no se le hubiere brindado la información necesaria es más ella autorizó que el bono emitido por la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda fuera negociado y estuvo conforme con la liquidación del mismo y con que se consignará o se completará por la parte de la AFP su valor en su cuenta de ahorro individual y además estuvo conforme con la pensión que le fue reconocida y que viene recibiendo desde hace más de 4 años.

*Aunado a que olvidó la parte demandante que debió haber vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público quién emitió negocio expidió el bono pensional con el cual se está financiando su pensión y que no puede declararse la nulidad y ordena remitir el capital de un Bono pensional pues es Claro que la nulidad hace que las cosas regresen a su estado anterior como si el traslado nunca hubiese existido por lo que la demandante no tendría derecho a ese Bono pensional el cual se originó precisamente por el traslado de régimen es decir la convalidación de esa semana que tenía cotizadas con anterioridad al traslado y que dentro del ahorro individual deberían de representar el dinero conforme lo establecido las normativas de la ley 100; por tanto teniendo en cuenta que la demandante con sus actuaciones posteriores al traslado de régimen **convalidó su intención de trasladarse y de pertenecer al RAIS** considera la sala que se equivocó el a-quo cuando declaró la nulidad del traslado.*

Virtud de lo dicho y teniendo en cuenta el resultado anterior del anterior problema jurídico se releva la sala del estudio de los demás problemas planteados y se revoca la decisión proferida en primera instancia para en su lugar absolver a las demandadas de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

2. Decisión de la Sala 1 de decisión del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso 26-2017-173 del pasado 12 de septiembre de 2018, con ponencia del magistrado Eduardo Carvajalino Contreras en donde manifestó:
3. "(...) no puede pasar por alto la sala que ***esta nulidad es susceptible de ser saneada a través de la ratificación expresa o tácita*** como lo prevé el artículo 1752 del código civil, siendo tacita según el artículo 1754 cuando quiera que se procede a ejecutar voluntariamente las obligaciones contratadas.

De cara a lo indicado, se colige que en los autos la AFP no logró probar a lo largo del proceso que para la fecha del traslado del régimen se le suministro al demandante una información veraz Clara y suficiente a efectos de que la afiliación del promotor al RAIS fuera suficientemente informado y Por ende lógico resultaría concluir que inicialmente existió un

No obstante **tal dilate vino a ser superado a través de la figura jurídica del saneamiento** en el momento en que el demandante forma libre y voluntario solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez a la AFP el 29 de febrero del 2016 (folio 200 a 201) y luego que la AFP le explicó las modalidades pensionales a las Cuáles podrían acceder (folio 202 a 204) teniendo Entonces el citado demandante entera certeza del monto de su pensión según aceptó el interrogatorio de parte (folio 256) el actor decidió después escoger a mutuo propio la modalidad de retiro programado (Folio 216) y comenzó a disfrutar de la pensión desde el primero de marzo del 2016 (Folio 204) lo que suma implica que ejecutó voluntariamente la obligación contratada artículo 1754 del código civil dando lugar a cooperar al saneamiento por aceptación tácita conforme al artículo 1753 del código civil por tanto no se puede sostener que se mantenía en error desde momento en que le fue reconocida la pensión, y sabía cuáles eran las consecuencias del mismo.

Por lo enunciado, aunque no desconoce este cuerpo colegiado la tesis jurisprudencial descrita por la Corte Suprema en sentencia 31988 del 2008 en la cual se fundamenta el recurso de alzada es necesario está sala apartarse la misma pues de acogerse dicho criterio Se desconocería los preceptos normativos contenidos en los artículos 1753 y 1754 del código civil sobre el saneamiento con la cual vulneraría el principio constitucional consistente en que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley siendo la jurisprudencia apenas un criterio auxiliar de conformidad con los artículos 230 la Constitución y 7 del código general del proceso por lo que a esta sala no le queda más que confirmar la Providencia emitida en primera instancia."

4. Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral MP ORLNADO ANTONIO GALLO ISAZA, Procesos 050013100720150129501 del 14 de agosto de 2019, donde el Honorable tribunal manifestó:

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena Radicado: 05001-31-05-007-2015-01295-01 fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum

(...)

Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un

negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.

Estos sería solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación."

Dichos pronunciamientos constituyen doctrina probable por lo cual ruego a su despacho sean aplicados en el caso en concreto, ya que no son de similares supuestos facticos al precedente de la H. Corte Suprema de Justicia.

V. EXCEPCIONES DE MÉRITO

Con el fin de salvaguardar los intereses de la entidad que represento, me permito formular las siguientes excepciones de mérito:

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación en la causa, sea por activa o por pasiva, es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste a una persona, sea natural o jurídica, para ostentar dicha calidad y, por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas.

La legitimación en la causa, desde la perspectiva ordinaria, explica la doctora Beatriz Quintero⁹ que *"nadie puede, en nombre propio, pretender o ser demandado a contradecir en proceso, resistir a una pretensión, sino por una relación, de la cual se atribuya o se le atribuya a él la subjetividad activa o pasiva"*.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la demandante, la señora **ARIEL DIAZ PARAMO** se encuentra válidamente afiliada al RAIS y está a menos de 10 de años de cumplir la edad de pensión, lo anterior teniendo en cuenta que nació el **06 de diciembre de 1962** y la edad límite en el caso de los hombres para solicitar el traslado de régimen es de **antes de cumplir los 52** años de edad, por lo tanto, se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva.

frente al tema, la Corte constitucional en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, arguyó lo siguiente:

⁹ Teoría General del Proceso, Temis, Bogotá, 2000

"La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo. La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material".

De igual forma, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada, la importancia que se acredite el presupuesto de legitimación en la causa para que las partes puedan actuar dentro de un proceso, en este sentido está el pronunciamiento realizado mediante Sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente: 20146 del 19 de octubre de 2011, expediente 19630 en los siguientes términos:

La legitimación en la causa por pasiva. Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la "calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso", (Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.) De forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. Consejo de Estado, sentencia de 25 de julio de 2011, expediente: 20.146. Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.

Al respecto, no sobra recordar lo dicho por la Sala en tal sentido, a saber:

"(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la Ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)". Consejo de Estado Sentencia de 23 de octubre de 1990.

La corte constitucional en sentencia T 1001 de 2006, ha manifestado que: *"La legitimación en la causa es una calidad sujeta de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso, por lo tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo. La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir*

la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material".

2. ERRONEA E INDEBIDAD APLICACIÓN DEL ARTICULO 1604 DEL CODIGO CIVIL

El artículo 1604 del Código Civil, señala:

"ARTICULO 1604. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR>. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes."

Dentro de los fallos relacionados con traslado de Régimen, la interpretación del artículo 1604 del Código Civil que realiza la Corte hace que la responsabilidad en cabeza de los fondos se convierta en objetiva, toda vez que no exige al demandante aportar soporte alguno que demuestre la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de afiliarse al RAIS; pero si obliga a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en el fondo, sin que exista un menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante.

Dicha apreciación quiebra la lógica de las cargas probatorias en este tipo de procesos, toda vez, que la responsabilidad objetiva **exige que la esfera de control sea exclusiva de quien causa el daño**. Este aspecto no aplica en casos de traslado de régimen, dado que los potenciales pensionados, cuentan con el **deber** de asesorarse. Veámoslo:

i). Obligaciones Legales del demandante según el Decreto 2241 de 2010 y en virtud de las obligaciones reciprocas del contrato de afiliación.

En este sentido el Decreto 2241 de 2010 que establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero determina las obligaciones en cabeza de los afiliados que pertenecen al Sistema General de Pensiones:

Artículo 4º. Deberes. Los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones **tendrán los siguientes deberes**, en lo que les sea pertinente:

1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.

2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.

3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso. En todo caso, toda decisión por parte del consumidor financiero deberá contener la manifestación expresa de haber recibido la capacitación e información requerida para entender las consecuencias de la misma o en su defecto la manifestación de haberse negado a recibirla.

4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas. En tal sentido, cuando de conformidad con la normatividad aplicable el silencio o la no toma de decisión por parte de los consumidores financieros de lugar a la aplicación de reglas supletivas establecidas en ella con impacto en sus cuentas de ahorro pensional, se entenderá dicho silencio como la toma de una decisión consciente con los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias que ello conlleve.

6. Mantener actualizada la información que requieren las administradoras del Sistema General de Pensiones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Informarse sobre los órganos y medios que la administradora ha puesto a su disposición para la presentación de peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.

83 Propender por el uso de los mecanismos que las administradoras del Sistema General de Pensiones pongan a disposición de los consumidores financieros para la educación financiera y previsional, **así como para el suministro de información.**

De conformidad con la anterior normatividad existen unos deberes mínimos en cabeza de los afiliados al sistema general de pensiones, destacándose que el SILENCIO en el transcurso del tiempo se entenderá como una decisión consciente de permanecer en el Régimen seleccionado. La única manera de desvirtuar esta regla legal es demostrando la preexistencia de una fuerza que hubiere viciado el consentimiento.

Es importante precisar que la Corte Suprema, dentro de los fallos relativos a nulidad o inexistencia del traslado de régimen, fundamenta parte de su decisión en el código Civil (artículo 1604) pero desconoce otras normas del mismo estatuto que establecen correlativamente obligaciones en relación con el demandante. Así pues, en lo que atañe al vínculo que genera el contrato de afiliación el Art. 1495 del aludido código civil dispone:

"Artículo 1495. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas".

De esta manera no es dable que, atendiendo exclusivamente a las obligaciones de la AFP, se invierta la carga de la prueba bajo un criterio de responsabilidad objetiva, desconociendo con ello las obligaciones paralelas en cabeza del cotizante, y desplazando las propias circunstancias del caso.

Respecto a la presunción legal *juris ignorantia non prodest* consagrada en el artículo 1509 del C.C. y el artículo 9 ibídem, relativa a que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, la Corte Constitucional en la sentencia C 993 de 2006, señaló "...**que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración**", precisamente porque el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es claro en señalar que el traslado al RPM ocasiona la pérdida del régimen de transición.

3. DESCAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA PENSIONAL.

De otro lado, es importante tener en cuenta el tema referente a la sostenibilidad financiera del sistema Pensional, de cual la CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-242 de 2009. Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, expresó:

"Las reformas a los regímenes pensionales, en particular, garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional y la financiabilidad de otros potenciales pensionados. Estas finalidades constitucionalmente relevantes obligan a la ponderación entre sacrificios

individuales y beneficios al sistema (artículo 48 CP, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005). Ello explica que esta Corte haya puesto de presente que el Legislador no está obligado a sostener en el tiempo las expectativas que tienen las personas, conforme a las Leyes vigentes, en un momento determinado. Su potestad de configuración legislativa le habilita a modificar los regímenes jurídicos en función de nuevas variables, razones de oportunidad o conveniencia, y a otros intereses y circunstancias contingentes que deba priorizar para lograr los fines del Estado Social de Derecho, desde luego, consultando parámetros de justicia y equidad, y con sujeción a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”

En igual sentido la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 del 2004 cuyo contenido reprodujo en lo pertinente en la sentencia C-062 del año 2010; en esta sentencia la corte claramente dijo lo siguiente:

(...)el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...)

Desde esta perspectiva si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)”

Ahora bien se debe tener en cuenta que el RAIS y el RPM tienen diferente forma de distribución del aporte, por lo cual **mas de 20** años en los cuales el demandante no ayudo a financiar las pensiones, y mi representada no cobro gastos de administración, van es detrimento patrimonial en caso de que el demandante regrese, pues basta con citar el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, que a su vez incremento el valor del aporte mediante decreto 4981 de 2007 al 16% para aporte a pensiones, en los cuales se estipulo que:

“ARTÍCULO 7o. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación **definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.**

En el régimen de ahorro individual con solidaridad **el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.**

(...)

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.”

El incremento se dio a través del decreto 4982 de 2007 que estipulo:

“Artículo 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización”

Se puede evidenciar entonces que si impacta en el sistema financiero el traslado de régimen de los aportes realizados al RPM del RAIS, sin el respeto del termino estipulado en la ley toda vez que la distribución es distinta teniendo en cuenta las características del mismo, ya que en el RPM se utiliza para financiar pensiones, sin mirar los riesgos que existen en el RAIS, por lo cual mi representa daría la utilización del aporte conforme le conviene al régimen.

En el año 2018 Colpensiones tenía programado presupuestalmente solicitar al nivel central \$14,39 billones de pesos, de los cuales únicamente solicitó el 63,7%, equivalente a \$9,16 billones de pesos, esto indica que se requirieron \$5,2 billones de pesos menos de lo presupuestado para el pago de pensiones reconocidas por vía administrativa y en cumplimiento de un fallo judicial.

Si bien, en los últimos años se ha evidenciado una disminución de las transferencias efectuadas por la nación a Colpensiones para el financiamiento de prestaciones económicas, como consecuencia directa de la gestión financiera realizada por la entidad, no hay que desconocer que para el año 2018, el Estado respaldó el 33% de la nómina de Colpensiones, por cuanto los recursos disponibles resultaron insuficientes para la misma.

Conforme lo anterior es claro que mi representada para ese año se tuvo una inyección de capital del PGN de 12,3 **Billones de pesos**, y para el año **2020 el capital es de \$43,29 billones** teniendo en cuenta que los aportes propios que recaudan no suplen el pago de pensiones y demás gastos de la Administradora Colombiana de pensiones.

La Constitución de 1991 en su artículo 1º establece que *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"*.

El Acto Legislativo 03 de 2011 integró a la Constitución Política el Principio de Sostenibilidad Fiscal, como un criterio de orientación de los diferentes órganos del poder público en Colombia, con el objeto de garantizar el financiamiento de los bienes y servicios brindados por el Estado, el cumplimiento frente a la deuda pública, reducir el nivel de endeudamiento y gasto público y en adoptar medidas económicas en procura de propiciar la sostenibilidad económica.

La sostenibilidad fiscal como condición para el desarrollo del Estado Social de Derecho, consiste en adoptar un derecho que contribuye a proteger a todos los demás y a darles continuidad bajo las diferentes condiciones que enfrente la economía para atender sus deberes sociales., resultando de gran connotación para el progreso económico y social del país en la medida que busca que, ante una determinada y limitada capacidad para recaudar ingresos y para acceder a recursos de financiamiento, la política de gasto pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y en el largo plazo se logren los objetivos públicos.

Respecto a este principio la Corte Constitucional señaló que, *"...la adopción del principio de sostenibilidad fiscal implica el compromiso de las autoridades del Estado en todos sus órdenes de acuerdo con sus competencias, en la expedición de normas, reglamentos, fallos, entre otros; que garanticen el avance de protección los DESC, principalmente bajo criterios programáticos en cumplimiento del mandato de progresividad, siempre que este se desarrolle bajo un parámetro de sostenibilidad, como criterio adicional de exigibilidad e interpretación constitucional, en realidad no es un principio constitucional, sino una*

herramienta para la consecución de los fines del ESDD¹⁰. En consecuencia, desde la perspectiva constitucional existe una estructura económica que permite dar cumplimiento tanto a los principios como a los derechos consagrados en la Constitución.

La noción de costo, entendida como el Gasto que ocasiona algo¹¹, para Colpensiones se visualiza **en el valor de los recursos del sistema pensional**, que utiliza la Administradora para subsidiar las pensiones que se den con ocasión de la declaratoria de nulidad o ineficacia de afiliación, está impactando significativamente la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, cuya observancia y protección expresamente dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado:

"El juez constitucional no puede ser ajeno al hecho de que una afectación grave de los ingresos y recursos del sistema de seguridad social no sólo perjudica la estabilidad financiera de la entidad administradora, sino también los derechos prestacionales de sus afiliados (..)"¹²

La Corte Constitucional se pronunció sobre la importancia de la estabilidad financiera del sistema general de pensiones, en la sentencia C-111 de 2006, mediante la cual declaró parcialmente exequible los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En esa oportunidad señaló:

"En cuanto a la adecuación y conducencia de la medida legislativa prevista en la norma demandada, esta Corporación debe reconocer que mediante dicha herramienta legal se pretende salvaguardar la solvencia financiera del régimen general de pensiones. Así las cosas, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes (...) (C.P. arts. 48 y 53).

// Lo anterior por cuanto la situación actual del sistema, principalmente el de prima media presenta grave riesgo en su estabilidad financiera y por ello es preciso restringir el pago de las pensiones al universo de beneficiarios con real derecho".

¹⁰ Sentencia 288 de 2012 Corte Constitucional

¹¹ Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 30 de abril de 2019, de Real Academia Española Sitio web: <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=costo>

¹² Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.

En la actualidad las decisiones tomadas por los despacho judiciales de declarar la nulidad o ineficacia de afiliación quebranta el principio de sostenibilidad financiera consagrado en el artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en el pago de las pensiones de las personas que venían aportando al sistema ayudando al sostenimiento del mismo, desdibujando totalmente el Régimen de Prima Media.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

Para los fines de esta excepción interesa señalar que la Corte Constitucional al pronunciarse sobre temas, como, por ejemplo, el de la progresividad en el conjunto de los derechos y disponibilidad de los recursos para el efecto, respetando la sostenibilidad fiscal, doctrina constitucional contenida en sentencias como la C-1052 de 2012, ha puntualizado que:

“El propósito del Acto Legislativo que ahora se presenta, es señalar al Congreso, así como a los demás órganos del Estado en todos los niveles, y según sus competencias, el deber de buscar, en forma deliberada, que sus diferentes decisiones **faciliten el logro de una sostenibilidad fiscal, como instrumento de protección de los derechos sociales de los colombianos, y como tal, de la realización de los fines del Estado Social de Derecho**”.

Ahora bien, no solo la jurisprudencia nacional ha destacado el deber Estatal de protección al derecho a la seguridad social, desde la perspectiva del principio de sostenibilidad fiscal y de estabilidad financiera, sin que ello implique su regresividad, con miras a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y fortalecer el sistema, pues, sobre el punto resulta pertinente recordar que la Comisión Interamericana de Derechos humanos consideró, en el caso de la Asociación Nacional de ex servidores del Instituto Peruano de la Seguridad Social y otras contra Perú, respecto de las pensiones excesivamente altas en comparación con la situación de los demás pensionados, lo siguiente:

"(...)

- Mantener la estabilidad financiera del Estado y asegurar que el régimen de seguridad social se encuentre basado en el principio de equidad, constituye un interés social y un fin legítimo del Estado en una sociedad democrática, y por tanto, en aras de hacer efectivos estos intereses los Estados tienen la obligación de tomar las medidas pertinentes.

- La limitación impuesta al derecho a la pensión puede ser proporcional si se configura como un mecanismo idóneo para asegurar la estabilidad financiera del Estado y eliminar la inequidad en el sistema de seguridad social.

La restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad, pues la obligación de no regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida¹³". (Negrillas para destacar). (...)"

Colpensiones como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, debe velar, en todo momento, por la protección de los dineros del erario público destinados a sustentar el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Es necesario traer a colación el principio constitucional contemplado en el Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1, del Acto Legislativo 01 de 2005, así:

*"El Estado garantizará los derechos, **la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional**, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas."* (Cursiva, Negrilla y Subrayado para destacar).

En ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política en esta materia.

El derecho a la seguridad social está estructurado de tal modo que se requiere de los siguientes elementos:

1. Las instituciones encargadas de la prestación del servicio.
2. Los procedimientos bajo los cuales este deben funcionar las administradoras de pensiones.
3. La provisión de fondos, con la sostenibilidad financiera asegurada de manera que garanticen su buen funcionamiento.

En este punto cobra especial importancia la labor del Estado, el cual, por medio de asignaciones de recursos fiscales y la legislación, tiene la obligación constitucional de brindar las condiciones, tanto jurídicas como presupuestales, para que los dineros destinados al pago de la seguridad social en pensiones mantengan el equilibrio financiero y, de este modo, garantizar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad social.

¹³ Dicho pronunciamiento aparece citado en la Sentencia C-258 de 2013.

En la regulación de este derecho fundamental, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, las normas constitucionales e internacionales¹⁴ no fijan un determinado modelo de seguridad social por lo que, mientras se asegure su correcta prestación, bien puede darse rienda a la creatividad legislativa orientada por instrumentos internacionales como las observaciones del comité de derechos económicos, sociales y culturales¹⁵.

Por parte de la Corte Constitucional, la seguridad social configura un derecho de carácter irrenunciable compuesto de un conjunto de garantías mínimas que reconocidas a quienes sufran menoscabo en su integridad a causa de los riesgos o contingencias inherentes a la vida en sociedad¹⁶. Con fundamento primero en la dignidad humana, el Estado debe asegurarse del cubrimiento de estas contingencias con atención a los principios de universalidad, eficiencia, solidaridad y, desde el acto legislativo 01 de 2005, sostenibilidad fiscal, principio que asegura que "cualquier regulación futura que se haga del régimen pensional debe preservar el equilibrio financiero del sistema general de pensiones" (subrayado fuera de texto original)¹⁷.

Es por los anteriores argumentos su señoría que no se debe declarar la nulidad o ineficacia del traslado, pues el último será del patrimonio público del cual se entre a pagar la pensión que llegare a percibir la parte demandante, ya que dado que su ahorro se hizo de manera individual no ayudó a financiar las pensiones de los demás pensionados del RPM y su ahorro no será suficiente para financiar su propia pensión.

En el eventual caso que sea declarada la nulidad ruego a su despacho considerar la realización de un cálculo actuarial a cargo bien sea del fondo responsable del vicio o del demandante, para soslayar la descapitalización del sistema, teniendo en cuenta que como lo menciona la sentencia SU 062 de 2010, para que una persona pudiera acceder al traslado por cumplir el requisito de 750 semanas, este adicionalmente tendría que pagar un cálculo de rentabilidad, y en estos casos no puede ser desconocida esta consideración.

4. INEXISTENCIA DEL DERECHO PARA REGRESAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA.

Tenemos que el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su literal b consagra que:

"b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o

¹⁴ Artículo 25-1 de la declaración universal de los derechos humanos.

¹⁵ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-613 de 2013

¹⁶ Corte Constitucional, Sentencias C-258 de 2013, C-1024 de 2004.

¹⁷ Corte Constitucional, sentencia C-078 de 2018. Sentencia que resalta dicho propósito en la exposición de motivos al proyecto de Acto Legislativo No. 127 de 2004 Cámara

jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.”

Conforme el artículo anterior y tal como se manifestó en las razones y fundamentos de derecho el demandante, se encuentra en la prohibición legal del artículo 2 de la ley 797 de 2003, tampoco está dentro de las excepciones consagradas en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, SU 062 de 20130 y SU 130 de 2013, atrás citadas. , por lo cual no reúne los requisitos legales para regresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, ello por cuanto no está cobijado por el régimen de transición y por tanto no puede regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, debió hacerlo cuando le faltaba más de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión, pero como la solicitud la elevó cuando eran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad ya no puede regresar al régimen administrado por mi representada.

De manera subsidiaria y en caso de que salgan avantes las pretensiones de la parte actora se solicita lo siguiente:

No es posible que Colpensiones tenga nuevamente como afiliado al demandante hasta tanto la AFP no haya anulado la afiliación al RAIS en el aplicativo MANTIS y se haya normalizado el estado de afiliado en el SIAFP.

- Colpensiones no puede cargar semanas e información en la historia laboral, hasta tanto la AFP no haya: i) pagado debidamente discriminados los conceptos ordenados en el fallo y ii) trasladado la información necesaria en debida forma y sin errores para realizar la imputación de aportes a la historia laboral, a través de la entrega del archivo con el detalle de aportes.
- Es importante que en el fallo se especifique que la última AFP a la que perteneció el demandante es la encargada de pagar todos los emolumentos ordenados en el fallo, incluyendo los gastos de administración, puesto que algunos Fondos se han negado al pago de esta obligación alegando que el demandante perteneció a varias AFP'S que en su momento cobraron las comisiones por administración, por lo que en tal caso lo viable es que se le asigne al último Fondo la facultad de recobro de dicho concepto.
- De igual manera, es necesario precisar que el pago se debe realizar discriminando el valor que corresponde a cada concepto, por cuanto el pago de una suma única totalizada impide establecer si cada concepto fue satisfecho en debida forma.
- Aunado a lo anterior, y de conformidad con el precedente de la Corte Suprema de Justicia, deberá asegurarse la devolución íntegra de recursos al RPM por parte de la

AFP, esto es: los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual junto con sus respectivos rendimientos, y los porcentajes correspondientes a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y porcentaje destinado al fondo de garantía pensión mínima, debidamente indexados.

5. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL

Se propone como tal para que tenga todos los efectos de rigor, pero sin que signifique que al hecho se esté reconociendo obligación a cargo alguno del Colpensiones, pues opera el fenómeno de la prescripción de acuerdo a los artículos 488 del código sustantivo del trabajo y 151 del código procesal del trabajo, por no haber sido reclamados los derechos que hoy se alegan dentro de la oportunidad allí establecida.

En efecto, afirma la parte actora haber solicitado a COLPENSIONES el traslado de régimen, esto es, de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida, petición que le fue denegada el mismo día, bajo la consideración de que se encuentra a 10 años o menos del requisito de tiempo para pensionarse y, si la solicitud a la Administradora de Pensiones y Cesantías la radico años después, estando el derecho extinguido por el transcurso del tiempo.

Sobre este punto su señoría valga traer a colación lo manifestado por las altas cortes del país frente a la prescripción del derecho pensional en la cual se tiene que:

*“La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio de vida digna, ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene **que el DERECHO A LA PENSIÓN NO SE EXTINGUE CON EL PASO DEL TIEMPO**”.*

Frente a este tema de la imprescriptibilidad del derecho pensional que no es de debate tenemos que en el presente caso no estamos frente a un derecho pensional en sí, sino frente a una acción tendiente a conseguir una nulidad, con el fin de obtener una mejor mesada pensional por parte del DEMANDANTE, bajo este entendido este tiene incólume su derecho pensional en el Fondo de Administradora en el cual actualmente se encuentra afilado, pues ahora bien no se siente satisfecho su cuantía.

Al respecto vale la pena traer a colación dos sentencias del Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Con ponencia del Magistrado Diego Roberto Montoya Millan sala 4 de decisión a saber:

Sentencia del 28 de febrero de 2018, dentro del proceso ordinario proveniente del Juzgado 18 radicación 2016-712 en la que respecto al tema de la prescripción manifestó:

“Entonces si como se enuncio el 11 de febrero de 2011 **se le comunico a el DEMANDANTE la negativa a sus solicitud de traslado** fue ese hecho el que la habilito para exigir el derecho ante la jurisdicción lo cual llevo a cabo a efecto el 5 de diciembre de 2016 (folio 20) es decir ya superado el termino trienal al que hemos hecho referencia pues atendiendo la fecha de la respuesta emitida por Porvenir el DEMANDANTE tenía hasta el 11 de febrero de 2014 para acudir a la jurisdicción, hecho que como quedo visto acaeció mucho después de dicha calenda razón por la **cual se encuentra probada la excepción de prescripción frente a la ineficacia del traslado** del régimen lo que derivada como consecuencia la absolución de las demandadas, pero por estas circunstancias”

En el mismo sentido en sentencia del 02 de mayo de 2018 dentro del proceso ordinario laboral proveniente del juzgado 21 radicación 2015-1016 en la que reitero:

“Entonces si como se enuncio el 23 de julio de 2004 **se le informo a el DEMANDANTE las consecuencias del traslado del régimen pensional**, fue ese hecho el que la habilito para exigir el derecho ante la jurisdicción, lo cual llevo a cabo el 3 de diciembre de 2015 (folio 92), es decir ya superado el termino trienal al que hemos hecho referencia; pues tenía hasta el 23 de julio de 2007 para acudir a la jurisdicción, hecho que como quedo visto acaeció mucho después de dicha calenda, razón por la cual **se encuentra probada la excepción de prescripción frente a la ineficacia del traslado del régimen** lo que derivada como consecuencia la absolución de las demandadas por cuanto las pretensiones relacionadas con el reconocimiento del derecho pensional en aplicación al acuerdo 049 del 90 derivaban directamente de la declaración de ineficacia de traslado a efectos de que el actor recuperara el régimen de transición”

Es por lo anterior que se debe declarar la prescripción frente a la nulidad alegada, teniendo en cuenta, que, en materia laboral, se tiene que prescriben las mesadas pensionales, los intereses moratorios, los incrementos pensionales, y demás derecho que se derivan de una pensión, y aquí lo que en el fondo se debate es una cuantía mas no el derecho pensional en sí.

6. CADUCIDAD.

En lo referente al concepto de esta figura valga la pena traer la definición dada por la H. Corte suprema de justicia al manifestar que: “la caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, **limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de ACCEDER A LA JURISDICCION con el fin de obtener pronta y cumplida justicia**. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

SEGURIDAD JURÍDICA, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario **apunta a la protección de un interés general**. La misma es una figura de orden público lo que explica su carácter **irrenunciable**, y la posibilidad de declaración de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia¹⁸”.

Se hace consistir la excepción en el hecho que la nulidad no se alegó dentro del término a que se refiere el **artículo 1750 del Código Civil**, norma que señala que el plazo para pedir la rescisión durara cuatro años, los cuales se contarán, en el caso de error o de dolo desde el día de la celebración del acto o contrato.

Es necesario aclarar su señoría que si bien la legislación laboral no trae regulación que estipule la caducidad, se tiene que estamos frente a un negocio jurídico celebrado entre particulares como lo es, el demandante y las **AFP COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.** situación que es regulada por disposiciones civiles como lo es el código civil, encuadrando perfectamente en la norma arriba citada.

Su señoría no se debe pasar por alto que mediante este medio exceptivo se protege la seguridad jurídica, es por ello que el legislador regula en diferentes materias esta figura, como en materia Civil, Penal, Disciplinaria, Administrativa, por lo cual no se debe descartar de plano que en lo laboral no aplique está más allá de los términos prescriptibles que establece la norma especial que regula estas relaciones.

7. INEXISTENCIA DE CAUSAL DE NULIDAD.

Sea lo primero traer de presente la jurisprudencia más acertada en lo que atañe a la diferencias entre inexistencia y nulidad de la cual se ha ocupado la Honorable sala de Casación Civil del Corte Suprema de Justicia, pues no debe perderse de vista que nos encontramos frente a un contrato entre particulares, negocio jurídico que nació a la vida para lo cual citare la sentencia del **pasado 25 de agosto de 2017 con radicación 25286-31-84-001-2005-00238-01, y Numero SC 13021-2017**, donde fue ponente el Magistrado **AROLDO WILSON QUIRZOZ MOSALVO** que al respecto manifestó:

"En el derecho romano la ineficacia de un negocio jurídico únicamente tenía dos vertientes: la nulidad de pleno derecho o la anulación judicial.

Pero desde el siglo XIX nació en un sector de la doctrina francesa la idea de la inexistencia del acto jurídico fundada en el incumplimiento de sus requisitos esenciales, distante de la nulidad que para ese entonces era unánimemente aceptada.

¹⁸ Sentencia C-1033 de 2006 Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

La teoría del acto o negocio inexistente, como una categoría opuesta a la nulidad es un tema que pertenece en plena propiedad a la doctrina francesa. (...) Es que en el derecho francés se dio una necesidad concreta y práctica: la imposibilidad de considerar más nulidades que las previstas en la ley. La aplicación de la regla pas de nullité sans texte, imponía buscar otras soluciones ante casos no previstos, pero que no podían validarse por ausencia de algún requisito. El remedio fue recurrir a la inexistencia de los actos.¹⁹

Ciertamente, fueron varias las **tesis del acto inexistente: la clásica** «...que consideró que el acto inexistente es el que carece de algún elemento indispensable, tales como el consentimiento, el objeto, la causa, o bien tiene un defecto en su forma»; la **tesis del negocio como un concepto lógico formal** que «...visualizando al negocio jurídico en una concepción lógico formal, observan que la relevancia o irrelevancia jurídicas se encuentran unidas al supuesto de hecho que prevé la norma»; la «negatoria»²⁰ que repele su reconocimiento, entre otras.

En el mismo sentido lo expresó la doctrina patria, al señalar:

La noción de inexistencia se originó en la doctrina francesa del siglo pasado, cuando algunos autores, en especial Zachariae y Demolombe, idearon esa categoría a propósito de desconocer un principio que había sido tradicional en la legislación de Francia y que se expresaba diciendo que **no hay nulidad sin texto** que la consagre. Se observó que hay casos en que, a pesar de no poderse remitir a duda la falta absoluta de efectos jurídicos de un acto, la ley no consagra explícitamente la nulidad del mismo. Se dijo que en tales hipótesis el acto o contrato, como no existió en forma alguna, tampoco tiene necesidad de ser declarado nulo.²¹

La inexistencia como nota distintiva en el campo de la ineficacia de los actos jurídicos no ha sido pacífica en la doctrina extranjera y nacional, lo que se reflejó en el ordenamiento patrio comoquiera que en nuestra legislación civil no cuenta con una caracterización normativa, mientras que en materia mercantil sí.²²

Sin embargo, en el campo civil ha sido objeto de estudio por vía jurisprudencial, al señalar inicialmente que **la inexistencia de un contrato no es asimilable a la nulidad** y que serán otras acciones las pertinentes para deshacer las prestaciones cumplidas por los contratantes:

¹⁹ Rubén H. Compagnucci De Caso, El negocio jurídico, Ed. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1992, págs. 511 a 513.

²⁰ Ob. Cit. Págs. 514 y 515.

²¹ Simón Carrejo, Derecho Civil, Tomo I, Ed. Temis, Bogotá, 1972, Págs. 240 a 241.

²² Arts. 897 a 898, C. de Co.

Nuestra ley no hace la distinción, calificada por algunos autores de meramente académica, que otros hacen **entre la nulidad absoluta y la inexistencia**. Si dos personas han entendido, por ejemplo, celebrar la compraventa de un inmueble sin escritura pública, ese contrato no existe, y aquél erróneo concepto de haberlo celebrado no da asidero a una acción de nulidad, sencillamente porque no hay contrato que anular, a tiempo que los pasos que esas personas hayan dado, en su falsa creencia, determinan otras acciones, por lo cual no se halla necesario asignar a la inexistencia un puesto o entidad especial con el fin de revestir a los interesados de medios adecuados para la efectividad de los derechos que les asistan. (CSJ SC de 15 mar. 1941, G.J. t. L, pág. 802).

Posteriormente, la Sala asimiló la acción de inexistencia con la de nulidad, tras iterar que nuestro ordenamiento no previó causa de invalidación del acto por aquél motivo:

Si la doctrina considera en abstracto el fenómeno de la inexistencia, es únicamente desde el punto de vista de la nulidad, como ha tenido la ocasión de precisarlo la Sala de Casación en fallos diferentes. Y es que **efectivamente la expresión contrato inexistente es en sí misma contradictoria**. Y lo es porque **el concepto contrato enuncia la existencia de un ente, o una realidad jurídica creada**, que puede ser viciosa pero en todo caso existente; es decir, enuncia una determinada relación con el atributo propio de los entes. En cambio, **el calificativo inexistente, es la negación misma del ente; y una cosa no puede ser, y no ser**, vale decir, no puede ser ente y no serlo al mismo tiempo. En rigor, prácticamente hablando, el problema en si cabe o no pensar en inexistencia, es del todo inoficioso puesto que, aun optando por la afirmativa, ello es que la ley no ofrece casilla especial para tal fenómeno ni le establece tratamiento singular y precisamente, por lo mismo, los casos de esa índole van a dar a la nulidad absoluta, que sí es fenómeno reconocido y reglamentado por la ley. Por tanto, piénsese sobre eso lo que se quiera, en lo judicial se les ha de colocar en el concepto de nulidad absoluta, lo que los deja en situación o calidad de cuestiones meramente metafísicas, sin transcendencia o sentido práctico, por interesantes que sean de suyo. (CSJ SC de 15. Sep. 1943, G.J. t. LVI, pág. 125, reiterada en SC de 19 jul. 1949, G.J. t. LXVI, pág. 351 y SC de 21 may. 1968, G.J. t. CXXIV, págs. 167 y 168).

Evocando esos anteriores fallos, recientemente la Corte recordó que ante la omisión legislativa aludida, esta Colegiatura la examina a manera **de causa anulatoria, exponiendo** que «... la Corporación de vieja data en distintos pronunciamientos ha concebido que la teoría de la inexistencia, cuyos diversos matices vienen expuestos, es una categoría jurídica desconocida en el interior del Código Civil, motivo por el cual tales aspectos los ausculta a la luz de la anulación, como así puede verse en los fallos de 15 de septiembre de 1943 (G. J., t. LVI, pag. 123), 21 de mayo de 1968 (CXXIV, pag. 168), 15 de marzo de 1941 (L, pags.802-804), entre otros ...» (CSJ SC de 6 ago. 2010 rad. nº 2002-00189-01).

En consecuencia, según nuestra jurisprudencia en el cuerpo jurídico civilista, no está contemplada la categoría de la inexistencia en los actos jurídicos, sino el concepto de nulidad, por lo que será este el conducto a seguir. (Negrilla y subraya fuera de texto).

Frente a la ineficacia del traslado tenemos que al respecto al tema la Corte Suprema de justicia²³ a manifestado al rememorar la Sentencia del 15 de marzo de 1944, al manifestar que:

“De antaño tiene decantado esta Corte: (...). El acto jurídico **TIENE EFICACIA** y trascendencia legal en cuanto **existen los elementos intrínsecos que lo condicionan, como son la CAPACIDAD, EL CONSENTIMIENTO, EL OBJETO Y LA CAUSA LÍCITA**, y en cuanto, cuando es el caso, se hayan llenado como lo determina la ley. La presunción de la validez y eficacia del acto jurídico ampara y favorece a quienes en él han intervenido como partes, cuando se trata de un acto bilateral, o a quien lo ha realizado cuando es unilateral. Quiere decir esto que para anular o desvirtuar un acto de esa naturaleza, es preciso que quien lo impugna destruya esa presunción, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso, que demuestre o los vicios internos del acto o la falta de las solemnidades o formalidades requeridas (...)”

Por la anterior en el presente caso no existe nulidad alguna pues la misma en que el artículo 1508 del Código Civil dispone que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo.

En sentido estricto, el error se puede definir diciendo que es la falsa noción de la realidad o en la discrepancia entre una idea y la realidad que esta pretende representar y por tanto debe determinarse con absoluta claridad si al momento de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, al demandante se le indujo en error para que suscribiera los documentos necesarios para el traslado del régimen al que venía afiliado y, si dicho error conforme al Código Civil es generador de nulidad, toda vez que no todo error que cometan los agentes repercute sobre la eficacia de los actos jurídicos, sino solamente aquel, que real o presuntamente, llegue a convertirse en el móvil determinante de la voluntad, o sea, en la causa de la prestación de dicha voluntad, pues según al artículo 1524 del mismo ordenamiento señala que no puede haber obligación sin causa real y lícita.

Vistos los hechos de la demanda fácil es concluir que el presente asunto no se da el vicio del consentimiento alegado por error, toda vez que el mismo no tiene la fuerza legal para repercutir sobre la eficacia jurídica del acto jurídico celebrado entre **EL DEMANDANTE** y las **AFP COLFONDOS S.A. y PROTECCIÓN S.A.** por no tratarse de un error dirimente o

²³ Ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia SC 19730 del 27 de noviembre de 2017 Rad 05001-31-03-007-2011-0481-01 M.P Luis Armando Tolosa Villabona.

error nulidad, que es aquel que, por esencial, afecta la validez del acto y lo condena a su anulación o rescisión judicial.

Conforme a lo anterior no estamos frente a lo consagrado en el artículo 1740 del Código Civil, el cual establece que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, en este caso el consentimiento.

Ahora bien, su señoría el error que se alega en la presente demanda no es otra que la contenida en el **ARTÍCULO 1509. Del código civil, ERROR SOBRE UN PUNTO DE DERECHO**. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, que en concordancia con el **ARTÍCULO 9o. IGNORANCIA DE LA LEY**. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, se debe entender que no existe el vicio alegado por la parte demandante.

Igualmente, en sentencia proferida el de marzo de 2017 proceso 07-2015-1140 Magistrada ponente Ángela Lucia Murillo:

*"En consecuencia, la sala no encuentra afectado el acto voluntario y libre del traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual realizado por el DEMANDANTE; **primero**, porque con el traslado no se incurrió en ninguna prohibición legal que lo impidiera; **segundo**, a la fecha del traslado el DEMANDANTE no tenía derechos adquiridos entendidos como aquellos que se consolidan una vez se ha cumplido todos los presupuestos normativos exigidos bajo el imperio de una ley; **tercero**, porque el error de derecho no es causal de nulidad de los actos que generan derechos y obligaciones; **cuarto**, por la voluntad de permanencia en el régimen de ahorro individual, que se reafirma con el gran número de semanas cotizadas con posterioridad a su afiliación."*

8. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ALEGADA.

Consiste en el hecho de que si hubo vicio del consentimiento por error generador de la nulidad alegada, la misma fue saneada en los términos del **artículo 1752, 1754 del Código Civil**, el cual dispone que la ratificación expresa o tácita puede sanear el vicio del contrato y, en el presente asunto el DEMANDANTE saneó la nulidad por la ratificación tácita que autoriza el artículo 1754 ibidem, al **ejecutarla de manera voluntaria lo acordado en el contrato** que autorizo el traslado de régimen en su momento, ello si se tiene en cuenta que el DEMANDANTE durante todo este tiempo (diligenciamiento del formulario de cambio de régimen hasta la fecha de presentación de la demanda), ha consentido en que se le hagan los descuentos respetivos con destino a su ahorro individual.

En este punto su señoría valga la pena cita el artículo 1742 del código civil el cual establece

ARTICULO 1742. OBLIGACION DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA.: *La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca*

de manifiesto en el **acto o contrato**; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. **Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.**

De la parte final del artículo anterior y aplicándolo al presente caso tenemos que no estamos frente a una nulidad por objeto o causa ilícitos, pues del libelo demandatorio solicita la nulidad por error como vicio del consentimiento, por lo cual está claramente puesto el saneamiento por ratificación ya expuesto, pero aún más por prescripción extraordinaria la cual se encuentra consagrada en la ley 791 de 2002 en su artículo 1 que reza:

"Artículo 1º. Redúzcase a diez (10) años el término de todas las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de **saneamiento de nulidades absolutas.**"

Por lo anterior su señoría se encontraría saneada ya que se evidencia que desde la firma del formulario de afiliación se ha superado el termino de 10 años.

9. NO PROCEDENCIA AL PAGO DE COSTAS EN INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ORDEN PÚBLICO

Sin que de manera alguna pueda considerarse aceptación de lo demandado, se pone a consideración de su señoría esta excepción bajo los siguientes parámetros legales, que permiten al fallador de instancia abstenerse de este tipo de condena, para lo cual principalmente acudiré al artículo 48 de la Constitución Nacional de Colombia que estipula:

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. (negrilla y subraya fuera de texto)

En este punto resalto el inciso 4 de este artículo en el que se refiera que no se podrán destinar los recursos de mi representada para fines diferentes a ella, por lo cual es dable interpretar, que el pago de Costas y agencias en derecho serian contrarios a esta preceptiva constitucional.

Ahora bien, el legislador en el artículo 365 del C.G.P en su numeral 5, otorgo a los jueces, la posibilidad de no imponer las costas procesales en casos en que prosperen parcialmente las pretensiones como se observa de la siguiente cita:

"Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...)

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión"

Con fundamento en la normatividad anterior y dado que mi representada no estuvo presente en la afiliación que tuvo la demandante al RAIS, ya que la asesoría que se brindo fue por parte de la AFP que la actora escogió de manera libre voluntaria y sin presiones, tenemos que no es dable imponer costas en el presente proceso a mí la Administradora Colombiana de Pensiones, - COLPENSIONES-

10. INEXISTENCIA DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION POR PARTE DE COLPENSIONES.

En el presente caso la demandante se encuentra afiliada al RAIS, por lo cual a mi representa no le corresponde en esta oportunidad el reconocimiento de la pensión de vejez, ahora bien, caso de salir adelante las pretensiones de la demandan, nos encontraríamos frente a una petición anticipada pues al momento que presento la solicitud pensional, no insiste no se encontraba afiliado a Colpensiones.

Igualmente, no es procedente el reconocimiento vía judicial, como consecuencia de la declaratoria de la nulidad o ineficacia, tal como lo ha sostenido el H. Tribunal superior de Bogotá²⁴ al indicar que:

²⁴ Ver sentencia Exp 11001310502220180053900 dte Doneira Manrique rivera Vs Colpensiones y otros, Mp Manuel Eduardo Serrano Baquero del 18 de diciembre de 2020.

“Igualmente se confirmará la decisión apelada en cuanto se abstuvo de ordenar el pago de la pensión. COLPENSIONES tendrá a su cargo la obligación pensional del demandante cuando se haga efectiva la anulación del traslado e ingresen los aportes y recursos que la financiarán, pues no se le puede endilgar ninguna responsabilidad por las omisiones que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia encuentra cometidas por los Fondos de Pensiones. Cuando COLPENSIONES reciba los aportes y los demás emolumentos de los Fondos privados, podrá definir las normas que se aplican por vigencia o transición para regular el derecho, el valor de la mesada que corresponde conforme a la actualización y consolidación del historial de cotizaciones, y solo desde el retiro del Sistema tendrá a su cargo el pago de la primera mesada pensional.”

Así mismo, dentro del proceso 11001310502720190046200, en sentencia del 30 de noviembre de 2021 con ponencia del Magistrado Marceliano Chávez Ávila, el Tribunal Superior de Bogotá, indicó que:

“Ahora bien, el Juez de instancia condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a favor del demandante, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Teniendo en cuenta lo anterior, es del caso resalta que, solo será objeto de estudio por parte de la accionada Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, cuando se haya realizado efectivamente la orden impartida en la presente sentencia, y se tenga la totalidad de datos y dinero del demandante en el régimen de prima media.

Lo anterior, como quiera que si bien dentro del RPM es menester exigir para el reconocimiento de cualquier prestación el retiro del sistema previamente por parte del afiliado, lo mismo ocurre en el caso bajo estudio, pues es indispensable que los aportes de la afiliado se encuentre debidamente reflejados en el reporte de historia laboral dentro del régimen de prima media, a efectos que Colpensiones pueda analizar su situación particular con datos concretos, y de manera precisa, sin lugar a errores dadas las circunstancias actuales en la que se encuentra el demandante.

En consecuencia, se revocará el numeral cuarto y quinto de la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar absolver a Colpensiones respecto del reconocimiento de la pensión de vejez (...).”

Por lo cual el reconocimiento pensional en este punto resulta imposible, y carente de sustento legal, por lo cual ruego se nieguen las pretensiones encaminadas al respecto.

11. NO CONFIGURACION DEL DERECHO AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS NI INDEMNIZACION MORATORIA.

De acuerdo con lo expuesto en la sustentación de las excepciones, al demandante no le asiste el reconocimiento y pago de los intereses moratorios teniendo en cuenta que no se le adeuda suma alguna por concepto de mesadas pensionales, además de ser excluyente con la pretensión de indexación.

Ahora bien, en el presente caso tampoco operarían el pago de intereses moratorios desde el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, donde manifestó que:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta siempre estuvo guiada por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.²⁵”

En concordancia con la sentencia SL 1818 de 2021 en la que indicó que:

“Así mismo, no proceden los intereses moratorios, toda vez que, como se explicó en la sentencia CSJ SL782-2021, la pensión de vejez objeto de condena, surge con ocasión a la declaratoria de la ineficacia del traslado, por lo que Colpensiones no pudo incurrir en omisión alguna. Además, su disfrute está condicionado a la fecha del retiro del sistema, según se indicó en precedencia.”

Así las cosas, los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser reconocidos y pagados cuando una vez reconocida la pensión no se paguen oportunamente las mesadas, es menester hacer énfasis que estos empiezan a correr a partir del sexto (6) mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, a

²⁵ Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Mp Jorge Mauricio Burgos Ruis SI704-2013 Radicación No. 44454 Acta N 31 del 2 de octubre de 2013.



luz de la sentencia (T-588-03, C-1024-04 y SU-065-18) situación que no se presenta en este caso por cuanto la demandante no se encontraba afiliada al RPM administrado por Colpensiones al momento de su solicitud de reconocimiento pensional.

12. INNOMINADA O GENERICA.

Solicito al señor (a) Juez que si halla probados hechos que constituyan una excepción se sirva reconocerla de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del C.G.P aplicado por vía remisoría en lo laboral según lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS.

PRUEBAS

Solicito señor Juez, de manera muy comedida, sean decretadas las siguientes pruebas dentro del presente proceso:

1. DOCUMENTALES.

- Historia laboral
- Expediente Administrativo

El cual se allega conforme las normas técnicas de gestión documental, y tablas de retención documental (TRD), y los estándares, así como los códigos utilizados en la digitalización de documentos por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

2. INTERROGATORIO DE PARTE:

Señor juez respetuosamente le solicito sea decretado y practicado el interrogatorio de parte:

- Al demandante el cual realizaré en la fecha y hora estipulada por el despacho

3. CONTRAINTERROGAR TESTIGOS:

- Señor juez le solicito respetuosamente que en la práctica de la prueba se permita contrainterrogar a los testigos solicitados por la parte demandante.
- Documentos declarativos provenientes de terceros y aportados al proceso por la parte demandante deben ser ratificados por quien los suscribe.

4. OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS:

Las que el señor Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al





momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza: "*Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes*".

ANEXOS

- Sustitución de poder a mi nombre.
- Documentos aducidos como prueba
- Escritura Pública No. 0214 del 23 de febrero de 2024 de la Notaria Setenta y seis (76) del Circuito de Bogotá, mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones le otorga facultades de representación judicial a la **UNION TEMPORAL LITIS UT 2023** la cual se encuentra representada legalmente por **JORGE ELIECER PABON MORALES**.

DIRECCION Y NOTIFICACIONES

LA OPOSITORA: Calle 49B No. 64C – 48. Edificio Distrito 65. Oficina 108. Medellín (Antioquia) Correo: notificaciones@colpensiones.gov.co

LA APODERADA: A la suscrita en la secretaria de su Despacho y a los correos electrónicos los correos electrónicos Email: abogado.4@findlay.com.co

Atentamente,



EDULCE CORREA ARGUELLES

C.C. No. 39.428.595

T.P. No. 235.514 del C.S. de la J.

E-mail: abogado.4@findlay.com.co

Teléfono: 3003868246



COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

INFORMACIÓN DEL AFILIADO

Tipo de Documento: **Cédula de Ciudadanía**
Número de Documento: **14241716**
Nombre: **ARIEL DIAZ PARAMO**
Dirección: **PARQUE DE ANDALUCIA APTO 402**
Estado Afiliación: **Asignado al RAI por Decreto 3995/2008**

Fecha de Nacimiento: **06/12/1962**
Fecha Afiliación: **19/12/1995**
Correo Electrónico:
Ubicación:

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	28/02/1984	30/11/1984	\$14.610	39,57	0,00	0,00	39,57
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	11/03/1985	30/11/1985	\$17.790	37,86	0,00	0,00	37,86
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	10/02/1986	30/11/1986	\$21.420	42,00	0,00	0,00	42,00
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	06/02/1987	30/06/1987	\$25.530	20,71	0,00	0,00	20,71
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTE	06/04/1988	31/12/1994	\$266.107	351,57	0,00	0,00	351,57
860002963	BANCO CENTRAL HIPOTE	01/01/1995	31/01/1995	\$263.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	01/02/1995	30/04/1995	\$450.000	12,86	0,00	0,00	12,86
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	01/05/1995	31/01/1996	\$500.000	34,29	0,00	0,00	34,29
860002962	BANCAFE	01/03/1996	31/03/1996	\$1.210.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/04/1996	30/04/1996	\$605.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/05/1996	31/05/1996	\$661.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/06/1996	30/06/1996	\$1.782.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/07/1996	30/09/1996	\$661.000	12,86	0,00	0,00	12,86
860002962	BANCAFE	01/10/1996	30/11/1996	\$514.000	8,57	0,00	0,00	8,57
860002962	BANCAFE	01/12/1996	31/12/1996	\$2.811.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/01/1997	28/02/1997	\$627.000	8,57	0,00	0,00	8,57
860002962	BANCAFE	01/03/1997	31/03/1997	\$1.376.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/04/1997	31/05/1997	\$627.000	8,57	0,00	0,00	8,57
860002962	BANCAFE	01/06/1997	30/06/1997	\$2.069.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/07/1997	30/11/1997	\$627.000	21,43	0,00	0,00	21,43
860002962	BANCAFE	01/12/1997	31/12/1997	\$2.946.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/01/1998	31/01/1998	\$778.000	4,29	0,00	0,00	4,29
860002962	BANCAFE	01/02/1998	28/02/1998	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
800136879	COOPERATIVA AHORRO S	01/03/1998	31/03/1998	\$765.000	4,00	0,00	0,00	4,00
800136879	COOPERATIVA UNISALUD	01/04/1998	30/09/1999	\$820.000	77,14	0,00	0,00	77,14
800136879	AHORRO SALUD COOFIND	01/10/1999	31/10/1999	\$410.000	2,14	0,00	0,00	2,14
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/10/1999	31/10/1999	\$485.000	2,57	0,00	0,43	2,14
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/02/2000	29/02/2000	\$570.000	2,43	0,00	0,00	2,43
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/03/2000	31/03/2000	\$458.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/04/2000	30/04/2000	\$566.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/05/2000	31/05/2000	\$808.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/06/2000	30/06/2000	\$261.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/08/2000	31/08/2000	\$404.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLI	01/08/2000	31/08/2000	\$356.000	4,29	0,00	4,29	0,00
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/09/2000	30/09/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLI	01/09/2000	30/09/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/10/2000	31/10/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLI	01/10/2000	31/10/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/11/2000	30/11/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLI	01/11/2000	30/11/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDI	01/12/2000	31/12/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLI	01/12/2000	31/01/2001	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

C 14241716 ARIEL DIAZ PARAMO

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
28545239	REYES DE RAMOS MARIA	01/07/2003	31/08/2003	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
					[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS: 751,00			
					[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 * "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"): 0,00			

RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
						[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:		

RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
		[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:

[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25])	751,00
--	--------

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/09/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán consideradas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas, Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	06/04/1988	31/12/1988	\$ 25.530	270	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/01/1989	31/12/1989	\$ 41.040	365	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/01/1990	30/09/1990	\$ 47.370	273	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/10/1990	29/02/1992	\$ 70.260	517	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/03/1992	31/10/1992	\$ 150.270	245	Pago aplicado al periodo declarado

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

C 14241716 ARIEL DIAZ PARAMO

[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/11/1992	31/01/1993	\$ 165.180	92	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/02/1993	28/02/1994	\$ 215.790	393	Pago aplicado al periodo declarado
11016200010	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	01/03/1994	31/12/1994	\$ 266.107	306	Pago aplicado al periodo declarado
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	28/02/1984	30/11/1984	\$ 14.610	277	Pago aplicado al periodo declarado
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	11/03/1985	30/11/1985	\$ 17.790	265	Pago aplicado al periodo declarado
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	10/02/1986	30/11/1986	\$ 21.420	294	Pago aplicado al periodo declarado
11018200068	COLEGIO TOLIMENSE	06/02/1987	30/06/1987	\$ 25.530	145	Pago aplicado al periodo declarado

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995

En el siguiente reporte encontrará el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] IBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46] Observación
860002963	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	NO	199501	03/02/1995	25002501000136	\$ 262.707	\$ 32.800	\$ 0	R	30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	DIAMANTE CIA FINANCIAMIENTO COMERCI	NO	199502	08/03/1995	52000401000756	\$ 450.000	\$ 57.300	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199503	10/04/1995	23023001000071	\$ 450.000	\$ 56.900	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199504	10/05/1995	53200601006004	\$ 450.000	\$ 58.400	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	DIAMANTE CIA DE FINANCIAMIENTO COME	NO	199505	08/06/1995	50001301003347	\$ 500.000	\$ 62.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199506	10/07/1995	53200601006601	\$ 500.000	\$ 66.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199507	09/08/1995	53200601006884	\$ 500.000	\$ 67.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199508	08/09/1995	53200601007291	\$ 500.000	\$ 62.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199509	09/10/1995	53200601008000	\$ 500.000	\$ 62.500	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199510	09/11/1995	53200601008380	\$ 500.000	\$ 65.400	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	GIROS Y FINANZAS S-A	NO	199511	07/12/1995	53200601008641	\$ 500.000	\$ 62.500	\$ 0	R	30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860006797	DIAMANTE CFC S A	SI	199512	09/01/1996	54702512002267	\$ 500.000	\$ 66.300	\$ 3.800		30	0	Nombres no concuerdan con Registraduría
860006797	DIAMANTE COMPANIA DE FTO CIAL	SI	199601	08/02/1996	53850201010690	\$ 500.000	\$ 73.200	\$ 0	R	30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199603	08/04/1996	50011001005686	\$ 1.209.796	\$ 163.300	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199604	07/05/1996	50011001005820	\$ 604.898	\$ 81.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199605	07/06/1996	50011001006011	\$ 660.988	\$ 89.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199606	03/07/1996	50011001006073	\$ 1.782.428	\$ 240.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199607	06/08/1996	50011001006289	\$ 660.988	\$ 89.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199608	05/09/1996	50011001006512	\$ 660.988	\$ 89.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199609	07/10/1996	50011001006727	\$ 660.988	\$ 89.200	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199610	07/11/1996	50011001006967	\$ 514.300	\$ 69.400	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199611	06/12/1996	50011001007190	\$ 514.300	\$ 69.400	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199612	07/01/1997	50011001007366	\$ 2.811.170	\$ 379.500	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199701	07/02/1997	50011001007636	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199702	06/03/1997	50011001007832	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199703	07/04/1997	50011001008077	\$ 1.375.903	\$ 185.800	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199704	07/05/1997	50011001008312	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199705	10/06/1997	50011001008579	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199706	07/07/1997	50011001008727	\$ 2.068.536	\$ 279.300	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199707	08/08/1997	50011001009012	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199708	08/09/1997	50011001009174	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

C 14241716 ARIEL DIAZ PARAMO

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
860002962	BANCAFE	SI	199709	07/10/1997	50011001009393	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199710	07/11/1997	50011001009571	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199711	09/12/1997	50011001009761	\$ 626.829	\$ 84.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199712	07/01/1998	50011001009936	\$ 2.945.783	\$ 398.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
860002962	BANCAFE	SI	199801	09/02/1998	50001101014647	\$ 777.989	\$ 105.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD	SI	199803	14/04/1998	10010101000133	\$ 765.333	\$ 103.500	\$ 200		28	28	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199804	12/05/1998	51166102006143	\$ 820.000	\$ 111.100	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA UNISALUD	SI	199805	09/06/1998	10010101000231	\$ 820.000	\$ 111.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199806	10/07/1998	10010101000374	\$ 820.000	\$ 111.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA UNISALUD	SI	199807	02/09/1998	10010101000574	\$ 820.000	\$ 109.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199808	13/10/1998	10010101000911	\$ 820.000	\$ 121.600	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199809	26/11/1998	23030001013624	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199810	27/11/1998	23030001013629	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199811	10/12/1998	10010101001273	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRA SALUD COOFINDES	SI	199812	13/01/1999	23030301012851	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199901	09/02/1999	54701814010206	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199902	10/03/1999	10010101001897	\$ 820.000	\$ 113.084	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199903	09/04/1999	10010101002001	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199904	10/05/1999	54701814011473	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199905	10/06/1999	54701814011889	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199906	23/07/1999	54702519001700	\$ 820.000	\$ 117.100	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD	SI	199907	10/08/1999	51166002004173	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199908	10/09/1999	54702509004225	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	COOPERATIVA AHORRO SALUD COOFINDES	SI	199909	08/10/1999	54702519002025	\$ 820.000	\$ 110.700	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
800136879	AHORRO SALUD COOFINDES EN LIQUIDACI	SI	199910	10/11/1999	54701825000413	\$ 410.000	\$ 55.400	\$ 0	R	15	15	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	NO	199910	08/11/1999	23010301015815	\$ 484.740	\$ 38.600	-\$ 26.900		30	18	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	NO	200002	06/04/2000	51356002026814	\$ 570.282	\$ 44.500	-\$ 32.400		30	17	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	NO	200003	27/04/2000	51356002027423	\$ 457.810	\$ 61.000	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	NO	200004	09/05/2000	51356002027904	\$ 565.530	\$ 79.800	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	NO	200005	09/06/2000	51356002028904	\$ 807.900	\$ 112.500	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	NO	200006	12/07/2000	51356002029991	\$ 261.000	\$ 35.400	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	SI	200008	21/09/2000	51356002031611	\$ 404.000	\$ 55.100	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200008	08/09/2000	52040102044988	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 0		30	30	Pago aplicado al periodo declarado
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200009	22/01/2016	941606702OJBK0	\$ 404.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200009	11/10/2000	51356002032232	\$ 404.000	\$ 54.800	\$ 54.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200009	22/01/2016	941606402OJBK1	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200009	09/10/2000	52040102045768	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200010	22/01/2016	941606902OJBK3	\$ 673.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200010	14/11/2000	51356002032966	\$ 673.000	\$ 91.400	\$ 91.400		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200010	22/01/2016	941606102OJBK2	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200010	09/11/2000	51166001047408	\$ 356.000	\$ 46.200	\$ 46.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200011	22/01/2016	941606702OJBK4	\$ 404.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	SI	200011	20/12/2000	51356002035756	\$ 404.000	\$ 55.100	\$ 55.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200011	22/01/2016	941606402OJBK5	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 mayo/2024
ACTUALIZADO A: 06 mayo 2024

C 14241716 ARIEL DIAZ PARAMO

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38]Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40]IBC Reportado	[41]Cotización Pagada	[42]Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46]Observación
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200011	11/12/2000	52040102047613	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	SI	200012	22/01/2016	9416061020JBK6	\$ 261.000	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***
890680062	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC	SI	200012	16/01/2001	51356002033518	\$ 261.000	\$ 31.500	\$ 0	R	30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200012	22/01/2016	9416069020JBK7	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200012	28/12/2000	52040102048046	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200101	22/01/2016	9416066020JBK8	\$ 356.000	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
890700640	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	SI	200101	12/02/2001	52040102049257	\$ 356.000	\$ 48.100	\$ 48.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
28545239	MARIA LIGIA REYES DE RAMOS	SI	200307	22/01/2016	9416063020JBK9	\$ 110.670	\$ 0	\$ 0		0	0	*** Aporte Devuelto ***
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200307	21/08/2003	50058501028114	\$ 110.670	\$ 14.615	\$ 14.615		10	0	Pago aplicado al periodo declarado
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/09/2003	50058501028317	\$ 22.133	\$ 3.000	\$ 3.000		2	0	No Vinculado Traslado RAI
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/08/2023	9423004073LXYX	\$ 22.133	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***
28545239	REYES DE RAMOS MARIA LIGIA	SI	200308	18/09/2003	94237020167936	\$ 22.133	\$ 0	\$ 0	R	0	0	*** Aporte Devuelto ***

**DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO
COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES**

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50]Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53]Asignación Básica Mensual	[54]Cotización Pagada	[55]Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59]Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

C 14241716

ARIEL DIAZ PARAMO

LECTURA DEL REPORTE DE LA HISTORIA LABORAL UNIFICADO

Resumen de Semanas Cotizadas por Empleador: este reporte contiene el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o como trabajador independiente, es decir las que se han cotizado desde enero de 1967 a la fecha.

1. **Identificación aportante:** número que identifica al aportante según el sistema al que pertenece. Hasta diciembre de 1994 número patronal y a partir de 1995, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.
2. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
3. **Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
4. **Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
5. **Último salario:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado y para las cotizaciones a partir de 1995 corresponde al salario reportado en el periodo desde-hasta.
6. **Semanas:** total de semanas correspondientes al periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
7. **Licencias (Lic.):** refleja las licencias no remuneradas, es decir periodo no laborado ni remunerado. Este valor es descontado del total de semanas del periodo cotizado.
8. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas cotizadas de manera simultánea a través de dos o más aportantes.
9. **Total:** es el total de semanas cotizadas del periodo, menos las licencias no remuneradas y el tiempo cotizado de manera simultánea.
10. **Total de Semanas Cotizadas:** corresponde al total general de semanas cotizadas a la fecha de generación del reporte.
11. **Total de Semanas Cotizadas Alto Riesgo:** corresponde al total general de semanas cotizadas por tarifa de alto riesgo. Este total se encuentra incluido en el total de semanas cotizadas (campo 10 Total de Semanas Cotizadas.)

Resumen de Tiempos Públicos no Cotizados a Colpensiones: este reporte es informativo y refleja el total de semanas reportadas y laboradas en el sector público, los cuales no fueron cotizados al ISS hoy Colpensiones.

12. **Identificación empleador:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
13. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
14. **Desde:** corresponde a la fecha inicial del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
15. **Hasta:** corresponde a la fecha final del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
16. **Último salario:** corresponde al último salario reportado por la entidad certificadora.
17. **Semanas:** corresponde a las semanas del periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
18. **Licencias (Lic.):** corresponde a las interrupciones laborales no remuneradas, reportadas por la entidad certificadora.
19. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
20. **Total:** es el total de semanas reportadas del periodo, menos las licencias no remuneradas campo (7. Licencias (Lic.)).
21. **Total de Semanas Reportadas:** corresponde al total general de semanas reportadas a la fecha de generación del reporte.

Resumen Tiempo Público Simultáneo con Tradicional (67 - 94) Y Post 94: este reporte refleja el total de semanas laboradas simultáneamente entre el sector público y privado para los tiempos tradicionales (67-94) y Post 94.

22. **Desde:** corresponde a la fecha inicial de la simultaneidad.
23. **Hasta:** corresponde a la fecha final de la simultaneidad.
24. **Semanas simultáneas:** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
25. **Total Semanas Simultáneas:** corresponde a la sumatoria total de semanas laboradas simultáneamente a la fecha de generación del reporte.
26. **Total Semanas:** corresponde a total semanas cotizadas más(+) total semanas reportadas menos(-) total semanas simultáneas reportadas y cotizadas a la fecha de generación del reporte.

Detalle de pagos efectuados anteriores a 1995: este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

27. **Identificación Empleador:** para los periodos anteriores a 1995 corresponde al número Patronal.
28. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).

C 14241716 ARIEL DIAZ PARAMO

29. **Ciclo Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
30. **Ciclo Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
31. **Asignación Básica Mensual:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado.
32. **Días Rep.:** número de días trabajados y reportados por el aportante para el periodo registrado.
33. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.
- Detalle de pagos efectuados a partir de 1995:** este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.
34. **Identificación del aportante:** número que identifica al empleador o trabajador independiente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.).
35. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
36. **RA:** indica si existe un registro de afiliación o relación laboral.
37. **Período:** año y mes al que corresponde el periodo cotizado.
38. **Fecha de pago:** fecha en que fue realizado el aporte.
39. **Referencia de pago:** número de registro del pago realizado (Calcomanía o Sticker o referencia de pago PILA).
40. **IBC Reportado:** es el salario (Ingreso Base de Cotización) declarado por el empleador o trabajador independiente, para el pago de la cotización.
41. **Cotización:** valor del aporte efectuado según el salario declarado en cada uno de los periodos.
42. **Cotización mora sin intereses:** es el dinero que el aportante adeuda por el periodo, sin incluir los intereses.
43. **Novedad(Nov.):** campo que indica con la letra "R", la novedad de Retiro reportada por el empleador.
44. **Días reportados:** número de días trabajados y reportados por el aportante en cada uno de los periodos.
45. **Días cotizados:** corresponde al número de días equivalentes al valor de la cotización pagada.
46. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

Detalle de periodos reportados por entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones: este reporte contiene el detalle de las semanas reportadas por las entidades certificadoras.

47. **Identificación del aportante:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
48. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
49. **RA:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
50. **Ciclo:** año y mes al que corresponde el periodo reportado.
51. **Fecha de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
52. **Referencia de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
53. **Asignación Básica Mensual:** es el valor de la asignación básica mensual reportado por la entidad certificadora. En este reporte no se verán reflejados los demás factores salariales reportados por la entidad certificadora, sin embargo serán tenidos en cuenta al momento de la decisión de la prestación económica a que haya lugar.
54. **Cotización pagada:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
55. **Cotización mora sin intereses:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
56. **Novedad (Nov.):** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
57. **Días reportados (Rep.):** número de días reportados por la entidad certificadora en cada uno de los periodos.
58. **Días cotizados:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
59. **Observación:** indica si el periodo se encuentra simultáneo con otro empleador. En caso en que se encuentre vacío, indica que el campo no es simultáneo.

Defensoría del Consumidor Financiero

Dirección: Calle 70A # 11-83 Bogotá.

Horario de atención: de 9:00 a.m. a 04:00 p.m. Jornada continua.

(57+601) 5439850, (57+601) 5439855 y 3203981187

Electrónico: defensorcolpensiones@defensorialg.com.co

Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle. Este reporte esta sujeto a revisión y verificación por parte de Colpensiones.

FORMULARIO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

COLPENSIONES - 2023.5214167
12/04/2023 04:45:22 PM
MEDELLIN CENTROCCID
ANTIOQUIA - MEDELLIN
AFILIACIONES
IMAGENES:2



CONSULTE EL ESTADO DE SU TRÁMITE EN
WWW.COLPENSIONES.GOV.CO

ESPACIO PARA LA ADMINISTRADORA

REGIONAL	OFICINA
Ejecutivo comercial	Doc. Ejecutivo comercial

I. DATOS GENERALES DEL AFILIADO O SOLICITANTE

DEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input checked="" type="checkbox"/>		FAVOR DILIGENCIAR EN LETRA MAYÚSCULA E IMPRENTA SIN SALIRSE DE LOS RECUADROS	
Tipo de documento: CC <input checked="" type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		N.º de documento: 14241716	
Fecha de Expedición: 13021981		Municipio Expedición: IBAGUE	
Departamento Expedición: TOLIMA		Sexo: M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Primer nombre: ARIEL		Segundo nombre:	
Primer apellido: DIAZ		Segundo apellido: PÁRAMO	
Fecha nacimiento: 06121962		Municipio nacimiento: IBAGUE	
Departamento nacimiento: TOLIMA		Nacionalidad: COLOMBIANO	
Dirección de residencia: CALLE 21 N° 21-79		Barrio / vereda de residencia: CENTRO	
Municipio de residencia: LA CEJA		Departamento de residencia: ANTIOQUIA	
Teléfono de residencia: 5531736		Celular: 3104664538	
Ocupación u oficio: DOCENTE		Ingreso mensual \$ 5.000.000 -	
Correo electrónico: arieldiaz74@gmail.com		Salario integral: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: El afiliado/ciudadano acepta y autoriza de manera expresa que COLPENSIONES envíe notificaciones, estados de cuenta y demás comunicaciones relacionadas con sus trámites y/o solicitudes a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (incluye correo electrónico, página web y mensaje móvil).		Es empleador: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección de ubicación laboral: Cra 76A N° 32A73		Alto riesgo: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Municipio de ubicación laboral: MEDELLIN		Barrio/ vereda de ubicación laboral: ROBLEDOS	
Departamento de ubicación laboral: ANTIOQUIA		Teléfono laboral: 4405100	

II. DATOS DEL EMPLEADOR O ENTIDAD AGRUPADORA

Tipo de documento: NIT <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		N.º de documento:		DV	Código CIU
Naturaleza: Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/>		Razón social o nombre:			
Dirección:		Municipio:			
Barrio / vereda:		Departamento:		Sucursal:	
Teléfono:		Celular:		Ocupación u oficio:	
Correo electrónico:					

III. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

1 Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		N.º de documento:		Fecha de nacimiento:	
Primer nombre:		Segundo nombre:		Día Mes Año	
Primer apellido:		Segundo apellido:			
Nacionalidad:		Dirección de residencia:			
Municipio de residencia:		Barrio / vereda de residencia:		Departamento de residencia:	
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Teléfono:		Celular:	
Parentesco: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		Correo electrónico:			
2 Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		N.º de documento:		Fecha de nacimiento:	
Primer nombre:		Segundo nombre:		Día Mes Año	
Primer apellido:		Segundo apellido:			
Nacionalidad:		Dirección de residencia:			
Municipio de residencia:		Barrio / vereda de residencia:		Departamento de residencia:	
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Teléfono:		Celular:	
Parentesco: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>		Correo electrónico:			

IV. AFILIACIÓN A PENSIONES

TIPO DE NOVEDAD	Vinculación inicial <input type="checkbox"/>	Traslado de régimen <input checked="" type="checkbox"/>	Traslado de entidad diferente <input type="checkbox"/>	Traslado por Pensión Familiar <input type="checkbox"/>	Ha cotizado más de 150 semanas las cajas o fondos del sector público? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Subsidiado: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Si marcó Traslado indique:	Entidad Actual: Protección	Entidad a donde desea trasladarse: COLPENSIONES				
El afiliado debe cotizar bajo el régimen especial de pensiones:		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		¿Cuál?		Tarifa con la que debe cotizar: %
<p>1. AUTORIZACIÓN PARA BÚSQUEDA, CONSULTA, USO Y MANEJO DE INFORMACIÓN: El afiliado/ciudadano acepta y autoriza de manera expresa a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en calidad de responsable y a los encargados de efectuar el tratamiento de datos, para la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionados con la prestación, gestión, administración, personalización, actualización y mejora de los trámites, bienes y servicios de COLPENSIONES, así como la consulta, búsqueda, recolección y uso en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y en aquellas entidades privadas y públicas que tengan información del afiliado/ciudadano para realizar los trámites que se refieren a las prestaciones, bienes y servicios de los diferentes componentes del sistema general de seguridad social administrados por COLPENSIONES. Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>2. AUTORIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN: El afiliado/ciudadano acepta y autoriza de manera expresa que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, directamente y/o a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, realice la verificación y uso de la información suministrada por el afiliado/ciudadano en su documento de identidad y en los demás que aporte a COLPENSIONES, ante las entidades u organismos pertinentes. Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>3. La información obtenida solo será usada para efectos propios de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>						

V. FIRMAS

<p>Hago constar que la selección de Régimen de Pensión que he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario he recibido una asesoría clara, oportuna y adecuada, en virtud de lo cual manifiesto que de manera informada he elegido a COLPENSIONES para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.</p>		<p>RECUERDE QUE USTED DISPONE DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES PARA RETRACTARSE DE SU AFILIACIÓN EN PENSIONES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE AFILIACIÓN O TRASLADO.</p>	
<p>DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR INCLUIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LOS QUE CORRESPONDEN A LA INFORMACIÓN QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA.</p>			
FIRMA DEL AFILIADO O SOLICITANTE	HUELLA AFILIADO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA

"Ven por tu FUTURO"



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14.241.716**
DIAZ PARAMO

APELLIDOS
ARIEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1962**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

O+

G.S. RH

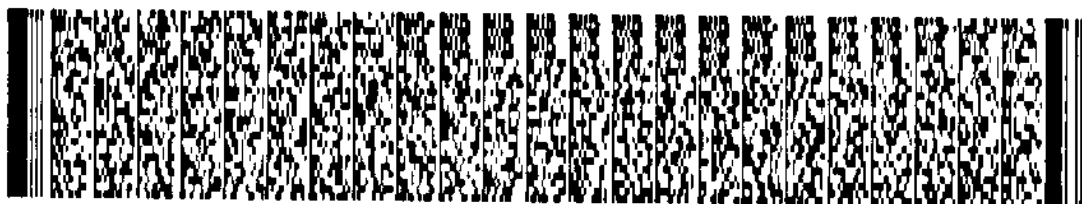
M

SEXO

13-FEB-1981 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00036601-M-0014241716-20080801

0001703754A 1

2320009642

MEDELLIN, 12 de Abril de 2023

2023_5214167-35460969

Señor (a):

ARIEL DIAZ PARAMO

CL 21 21 79

LA CEJA - ANTIOQUIA

Referencia: Radicado No. 2023_5214167 del 12 de Abril de 2023

Ciudadano: ARIEL DIAZ PARAMO

Identificación: C.C. 14241716

Tipo de Trámite: AFILIACIONES - Traslado de Régimen

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en la referencia, no ha sido aceptada.

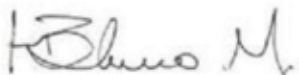
Lo anterior por los siguientes motivos:

Motivos de Rechazo

No es procedente dar trámite a su solicitud, por cuanto la información consultada indica que se encuentra a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse
--

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, o con la línea gratuita nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Cordialmente,



HERNANDO BLANCO MANCHOLA
Director de Atención y Servicio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




05001310500120230040300

Fwd: 2023 00403 Notificación Demanda

Notificaciones Judiciales - Colpensiones <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>

Jue 25/04/2024 14:26

Para:Radicacion Judicial 3 <radicacionjudicial3@syc.com.co>

 1 archivos adjuntos (76 KB)

02AutoAdmiteDemanda (10).pdf;

DEMANDAF

----- Forwarded message -----

De: **Juzgado 01 Laboral Circuito - Antioquia - Medellín** <j01labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: jue, 25 abr 2024 a las 13:36

Subject: 2023 00403 Notificación Demanda

To: notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>

Señor

JAIME DUSSÁN CALDERÓN

Representante legal, o quien haga sus veces.


ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Buenos días, mediante el presente y conforme el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022 se realiza NOTIFICACIÓN a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES representada legalmente por JAIME DUSSÁN CALDERÓN, o quien haga sus veces del **auto que admite la demanda**, en el proceso ordinario laboral promovido por **ARIEL DIAZ PARAMO** contra **COLPENSIONES y OTROS**, el cual se tramita bajo el radicado 05001 31 05 001 **2023 00403 00**.

Para el efecto anexo en 1 archivo pdf, auto que admite demanda un enlace para acceder al expediente completo.

Se **advierte** que la notificación se entenderá surtida dos días hábiles después de la entrega del presente correo, y una vez surtida comenzarán a correr el término de 10 días para **contestar** la demanda, por tal motivo, en caso de tener algún problema con el acceso al anexo deberá informar de inmediato so pena de que los términos corran a pesar de tal situación.

Puede acceder al **expediente completo** del proceso, en el siguiente enlace:

 05001310500120230040300

Atentamente,



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Luz Yesenia Muñoz Pineda

Citadora
Juzgado 01 Laboral Del Circuito de Medellín

✉ j01labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

☎ Teléfono: 604 232 85 25 EXT 2601

📍 Cra.52 # 42-73 Piso 09 Of. 901 Medellín-
Antioquia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

--



Notificaciones Judiciales Colpensiones

Carrera 9 No. 59 - 61 Local 2

PBX (57) (601) 2170100

Gerencia de Defensa Judicial

Bogotá D.C. - Colombia

www.colpensiones.gov.co



JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, veintitrés (23) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicado:	05001 31 05 001 2023 00403 00
Demandante:	Ariel Díaz Paramo
Demandado:	Colpensiones Protección S.A.
Integrado:	Colfondos S.A.
Decisión:	Admite Demanda

Por medio de este interlocutorio procede esta servidora judicial a establecer si la presente demanda promovida por **ARIEL DÍAZ PARAMO** con CC N° 14.241.716, por conducto de apoderado judicial, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** representada legalmente por JAIME DUSSÁN CALDERÓN, o quien haga sus veces y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, representada legalmente por JUAN DAVID CORREA SOLOZARNO, cumple o no con los requisitos de fondo y de forma, de modo que se pueda establecer una relación jurídico procesal de forma regular que le permita al Juez decidirla de fondo.

Encontrando que, de conformidad con las normas que regulan la materia y satisfecho el requisito establecido en el artículo 6° del Código Procesal Laboral, se es competente para conocer del presente proceso, se encuentran presentes la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, se reúnen los requisitos de forma establecidos en el artículo 25 del C. P. del Trabajo y de la S.S. y además fueron acompañados los anexos a que se refiere el artículo 26 ibídem, por lo que la demanda será admitida; adicionalmente dado que en la demanda se indica que simultáneamente se hicieron cotizaciones en Colpensiones y Colfondos desde enero de 2001 y conforme a historia laboral de Colpensiones, los aportes fueron efectivamente devueltos a partir de septiembre de 2000 por traslado de régimen, por lo que en aplicación al inciso 2° del artículo 61 del Código General del Proceso, en concordancia con los principios de celeridad y economía procesal que rigen la administración de justicia, se ordena integrar en calidad de Litis consorte necesario por pasiva a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, representada legalmente por MARCELA GIRALDO GARCÍA, o quien haga sus veces.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este despacho;

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA al Dr. GUILLERMO LEÓN TAMAYO GUTIÉRREZ con CC N° 70.125.909 y TP N° 105.905 del CS. de la J., para representar los intereses de la parte demandante.

SEGUNDO: ADMITIR la demanda promovida por **ARIEL DÍAZ PARAMO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, representada legalmente por el Dr. JAIME DUSSÁN CALDERÓN, o quien haga sus veces y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, representada legalmente por JUAN DAVID CORREA SOLOZARNO, o quien haga sus veces, a la que se le dará el trámite previsto para el proceso ordinario laboral de primera instancia.

TERCERO: INTEGRAR a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**, representada legalmente por la Dra. MARCELA GIRALDO GARCÍA, o quien haga sus veces, en calidad de litis consorte necesario por pasiva.

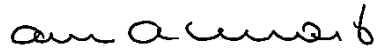
CUARTO: NOTIFICAR personalmente del presente auto al representante legal de las demandadas y la integrada, atendiendo a lo establecido en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, a quienes se le correrá traslado enviándoles copia de la demanda, informándoles que cuentan con diez (10) días hábiles para contestar la misma. Por secretaría remítase la notificación.

QUINTO NOTIFICAR personalmente el presente auto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con los incisos 6° y 7° del artículo 612 del Código General del Proceso.

SEXTO: NOTIFICAR a la Procuradora Judicial para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social Dra. MARLENY ESNEDA PÉREZ PRECIADO, de conformidad con el artículo 74 del CPTSS, dándole traslado de la misma forma que para la parte demandada.

SÉPTIMO: REQUERIR a las demandadas para que se sirvan dar cumplimiento al artículo 31 del C. P. del Trabajo y de la S.S. modificado por el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, que impone el deber de anexar las pruebas documentales que anuncie, los documentos relacionados en la demanda y las pruebas anticipadas, que se encuentren en su poder.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ana gertrudis arias vanegas', written in a cursive, flowing style.

ANA GERTRUDIS ARIAS VANEGAS

JUEZA



SEÑOR
JUEZ PRIMERO (001) LABORAL DE CIRCUITO DE MEDELLÍN
E.S.D.

RADICADO: 05001310500120230040300
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: ARIEL DIAZ PARAMO
DEMANDADO: COLPENSIONES

ASUNTO: PODER ESPECIAL

JORGE ELIECER PABON MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.490.732 de Bogotá D.C., en mi calidad de representante legal de la firma **UNION TEMPORAL LITIS UT 2023**, bajo el NIT 901.796.013-1 sociedad con domicilio principal la ciudad de Bogotá., actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, con el fin de realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado mediante la Escritura Pública No. 0214 del 23 de Febrero de 2024 de la Notaria Setenta y seis (76) del Círculo de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito SUSTITUYO poder a la Doctora **EDUILCE CORREA ARGUELLES**, igualmente mayor y vecino de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **39.428.595** y portador de la Tarjeta Profesional No. **235.514 del C. S. de la J.**, el apoderado queda revestido de las mismas facultades otorgadas al suscrito, como las de conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar a este poder y de las demás facultades que sean necesarias para el cumplimiento de este mandato, según lo establece el Art. 77 del C.G.P

En consecuencia, sírvase reconocer personería a la Doctora **EDUILCE CORREA ARGUELLES**, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De usted, respetuosamente,

Acepto;

JORGE ELIECER PABON MORALES
C.C. No. 80.490.732 de Bogotá D.C.
T.P. No. 241.510 del C. S. J.

EDUILCE CORREA ARGUELLES
C.C. 39.428.595 de Apartadó
T.P No. 235.514 del C. S. J

República de Colombia



Aa094728148



Ca46387466

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:-----0214-----
CERO DOSCIENTOS CATORCE-----
DE FECHA: VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO
(2.024) OTORGADA EN LA NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C-----

CLASE DE ACTO O CONTRATO: PODER GENERAL.-----
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO. -----

PODERDANTE: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE.
NIT. 900.336.004-7

APODERADOS -----
UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 -----
NIT. 901.796.013-1 -----

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la Notaría SETENTA Y SEÍS (76) del Círculo de Bogotá, D.C., cuya Notaría TITULAR es la Doctora MARIA TERESA GUTIÉRREZ OVALLE, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes términos: -----

COMPARECÍO -----

Compareció **DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR**, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número CC 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE**, con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a la **UNION TEMPORAL LITIS UT 2023** con NIT 901.796.013-1, conformada por las sociedades **UMBRAL JURÍDICO S.A.S.**, con NIT 901.064.291-1, **MÁS BIENESTAR S.A.S.** con NIT 900.909.989-6 y **FINDLAY**

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia cadena.

Napel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

02004723149

92094723148

Ca483874669

PREVIOUS - 2006/2007

●

Procedures: euope

cadena. No funciona 12-12-99

1138409GC3550J80

CONSULTORES S.A.S. con NIT 901.045.512-1, según consta en documento privado del 22 de enero de 2024, documento que se protocoliza con el presente instrumento público, para que en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones - **COLPENSIONES, EICE**, con NIT. 900.336.004-7, actúe en los en los siguientes términos:-----

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura a **UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 CON NIT 901.796.013-1**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES**, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial.-----

El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE**, con NIT. 900.336.004-7, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que *"tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda."* ---

CLÁUSULA SEGUNDA. – El representante legal de **UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 CON NIT 901.796.013-1**, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** -----

cadena.

República de Colombia

Pag. 3



Aa094728147



Ca463874668

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, CLÁUSULA TERCERA. – Ni el representante legal de UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 CON NIT 901.796.013-1, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. -----

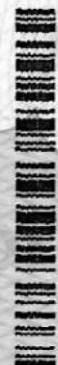
Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, por parte del representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 CON NIT 901.796.013-1, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. -----

CLÁUSULA CUARTA. – Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de UNION TEMPORAL LITIS UT 2023 CON NIT 901.796.013-1, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, con NIT. 900.336.004-7. -----

HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA -----

CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9º Decreto Ley 960 de 1.970) La Notaria responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo. (ARTS. 35 y 102 del decreto Ley 960 de 1.970): Se advirtió a los otorgantes de ésta escritura de la obligación que tiene(n) de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos consignados en ella, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total de texto. En consecuencia la Notaria no asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y de la Notaria en tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos. -----

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Aa094728147



1138209CC44664C9

28-12-22

cadena. 12-12-23

12-12-23

cadena. 12-12-23

11383GCG8508890

IMPUESTO DE IVA :

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto Tributario, por el otorgamiento de la presente escritura se cancela la suma de \$ 30.001 por concepto de Impuesto a las ventas a la tarifa del diecinueve por ciento (19%) sobre los derechos notariales ----

NOTAS DE ADVERTENCIA

PRIMERA.- Se advierte a los otorgantes, que son responsables legalmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. -----

SEGUNDA .- Se advierte a los otorgantes, que son responsables legalmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales; así mismo se advierte y se informa si desea recibir notificaciones sobre el estado de este trámite de conformidad con la Ley 1437/2011 de CPACA; para lo cual anexa su correo electrónico

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION.- Leído el presente instrumento público por los otorgantes y advertidos de las formalidades legales de su registro dentro de los términos y tiempo establecidos, estuvieron de acuerdo con él, lo revisaron y concuerda en todo con lo acordado por ellos y así lo aceptan y en tal forma, lo firman junto con la suscrita notaria que de lo expuesto anterior doy fe y por ello lo autorizo.-

El presente instrumento público se contiene en las hojas de papel notarial números: en todo con lo acordado por ellos y así lo aceptan y en tal forma, lo firman junto con la suscrita notaria que de lo expuesto anterior doy fe y por ello lo autorizo.-----

El presente instrumento público se contiene en las hojas de papel notarial números: -
Aa094728146- Aa094728147- Aa094728148-----

<u>Derechos notariales</u>	<u>:\$ 81.900</u>
<u>Superintendencia de Notariado y Registro</u>	<u>: \$ 8.700</u>
<u>Cuenta especial para el Notariado</u>	<u>: \$ 8.700</u>



113815098GPOCG#3

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4267878050104126

Generado el 08 de febrero de 2024 a las 17:17:19

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

NIT: 900336004-7

NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo.. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009 Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011 La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012082076 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012 Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrá su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5 Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Contacto: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superrfinanciera.gov.co



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pln No: 4267878050104126

Generado el 08 de febrero de 2024 a las 17:17:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente, quien será su representante legal. PARAGRAFO 1. El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), deberá cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, cualquiera de los Vicepresidentes o por el Gerente de Defensa Judicial de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021). FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, a través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarlas y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa, que no corresponda a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las



Ca463874665

Ca463874665



12-12-23

cadena. NL 596350340

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4267878050104126

Generado el 08 de febrero de 2024 a las 17:17:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Jalme Dussan Calderon Fecha de inicio del cargo: 26/01/2023	CC - 12102957	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Javier Eduardo Guzmán Silva Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018	CC - 79333752	Suplente del Presidente
Diego Alejandro Urrego Escobar Fecha de inicio del cargo: 10/02/2022	CC - 79983390	Suplente del Presidente
Oscar Eduardo Moreno Enriquez Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019	CC - 12748173	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020289549-000 del día 1 de diciembre de 2020, que con documento del 12 de noviembre de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 019 del 12 de noviembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
María Elisa Moron Baute Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019	CC - 49790026	Suplente del Presidente

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Contactador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.supfinanciera.gov.co



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 4267878050104126



Ca463874664

Generado el 08 de febrero de 2024 a las 17:17:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Jose Mauricio Vega Lopera

JOSE MAURICIO VEGA LOPERA
SECRETARIO GENERAL ENCARGADO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 4 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



Ca463874664

12-12-23

cadena. No. 29905340

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM



Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: UMBRAL JURIDICO S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 901064291-1
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-582352-12
Fecha de matrícula: 27 de Febrero de 2017
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2023
Grupo NIIF: GRUPO III.

CONDICIÓN DE PEQUEÑA EMPRESA JOVEN

PEQUEÑA EMPRESA JOVEN: DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1º ARTÍCULO 2º DE LA LEY 1429 DE 2010 Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1780 DE 2016, EL COMERCIANTE CUMPLE CON LA CONDICIÓN DE PEQUEÑA EMPRESA JOVEN.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 40 A 20 OFICINA 1012
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: alejo.j.ayala@gmail.com
umbraljuridico.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3104039132
Teléfono comercial 2: 3104036963
Teléfono comercial 3: 3122574305
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 40 A 20 OFICINA 1012
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: alejo.j.ayala@gmail.com
umbraljuridico.sas@gmail.com

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM

CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA



Ca463874663

Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 1: 3104039132
Teléfono para notificación 2: 3104036963
Teléfono para notificación 3: 3122574305

La persona jurídica UMBRAL JURIDICO S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado, Otorgado Por el Unico Accionista, en febrero 14 de 2017 Registrado en esta Entidad en febrero de 2017, en el libro 9, bajo el número 4101, se constituyó una Sociedad Por Acciones Simplificada denominada:

UMBRAL JURIDICO S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO:

La sociedad tendrá por objeto principal la prestación de servicios profesionales, consultaría, asesoría en materia legal y empresarial, la representación judicial directamente o por intermedio de sus delegados. Así mismo podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita. No obstante lo anterior y de conformidad con el numeral 52 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, la Sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

Desarrollo del objeto. Para el desarrollo del objeto la sociedad podrá:

A) Adquirir todos activo fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de las actividades sociales, gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o comerciales se necesaria

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM



Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpibRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

su disposición.

- B) Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y por los servicios a los que se extiende su giro, si se trata de derechos de terceros; celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial.
- C) Concurrir a la constitución de otras empresas sociedades, con o sin el carácter de filiales o vincularse a empresas o sociedades ya existentes mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporadas o incorporarse a ellas.
- D) Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus necesidades.
- E) Podrá realizar cualquier actividad civil comercial lícita y en especial efectuar la inversión de sus fondos o disponibilidades en bienes muebles ó inmuebles los cuales tendrán el carácter de activos fijos con fines rentísticos y de valorización y particularmente la conformación administración y manejo de portafolio de inversiones propias constituido por acciones, cuotas sociales o partes de interés en sociedades nacionales o extranjeras, títulos de participación inversión, bonos emitidos por entidades públicas y privadas y por otros títulos valores de contenido crediticio o de participación de libre circulación en el mercado, cédulas u otros documentos de deuda.
- F) Dar y recibir en garantía de obligaciones, bienes muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento, leasing u opción de cualquier naturaleza:
- G) Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como girar, endosar, protestar, ávalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés o cualquier otro acto de comercio sobre títulos valore en general y, celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general crediticias.
- H) Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras, toda clase de operaciones propias de su objeto.
- I) Celebrar contratos de cuentas en participación, sea como participe



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Ca463874662

Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

activo o como participe inactivo.

M) Elaborar de toda clase de estudios técnicos, de mercadeo y de factibilidad, para lo cual podrá hacer alianzas estratégicas.

Actuar en funciones propias de corretaje mercantil o como agente de intermediación de negocios comerciales, pudiendo actuar como accionista o mandatario.

Transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros o de amigables compositores, en las cuestiones en que tenga, intereses, frente a terceros, a los asociados mismos o a sus administradores o trabajadores.

En general, hacer, sea en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o las de las empresas en las que tenga intereses y se relacionen directamente con el objeto social.

PARÁGRAFO. La Sociedad podrá servir como garante de las obligaciones de los accionistas o de terceros siempre que medie autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de un número mayoritario de accionistas del-setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$1.000.000.000,00
No. de acciones	:	100.000,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$228.000.000,00
No. de acciones	:	22.800,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$228.000.000,00
No. de acciones	:	22.800,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

Ca463874662

12-12-23

cadena. No. 19955340

1138262505880003

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM



Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL:

La representación legal de la sociedad será ejercida por un (1) representante legal principal y un (1) representante legal suplente,, quienes serán nombrados por la asamblea de accionistas.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Representante legal ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las siguientes:

1. Presentar a la Asamblea de Accionistas informes anuales sobre la marcha de los negocios sociales acompañados de estados financieros, de fin de ejercicio, con proyecto de distribución de utilidades o cancelación de perdidas líquidas conforme detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, reformas introducidas demás informes que requiere el máximo órgano social de acuerdo con la ley o los estatutos.
2. Presentar al máximo órgano social un informe detallado sobre la marcha general de los negocios y empresas sociales, sobre las reformas introducidas y las que a su juicio sea conveniente acometer en sus métodos de? trabajo y sobre las perspectivas de los mismos negocios;
3. Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo, y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, presentará los estados financieros que fueren pertinentes, un informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades en caso de rendición de cuentas de fin de ejercicio. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad, e incluir igualmente indicaciones, sobre los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad y las operaciones celebrada con la accionista y con los administradores;
4. Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos
5. Representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Ca463874661

Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpibRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

6. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales;

7. Efectuar el nombramiento de los empleados cuya designación no corresponda al máximo órgano social;

Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a cumplir los fines sociales. En general llevar a cabo la representación de la sociedad en todos los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	ELSA NIDIA TORO BALCAZAR DESIGNACION	32.543.421
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ALEJANDRO JULIAN AYALA TORO DESIGNACION	98.764.189

Por Documento Privado del 14 de febrero de 2017, del Único Accionista, registrado(a) en esta Cámara el 27 de febrero de 2017, en el libro 9, bajo el número 4101

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Ca463874661



12-12-23

cadena. na. 09/09/2023

1138150U8G90CG9G

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM



Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 6910

Actividad secundaria código CIIU: 6810

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	UMBRAL JURIDICO S.A.S.
Matrícula No.:	21-629366-02
Fecha de Matrícula:	27 de Febrero de 2017
Ultimo año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 55 40 A 20 OFICINA 1012
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Ca463874660

Recibo No.: 0025574493

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpiBRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 74 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Interior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o descrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$126,304,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es la representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Ca463874660



12-12-23

cadena. No. 9903340

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 29/09/2023 - 12:19:05 PM



Recibo No.: 0025574493

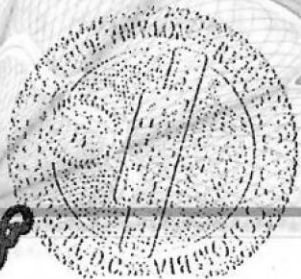
Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kLhpibRhjbkaNccj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.M.P.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Ca463874659

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario

14978086651



(415)7707212489984(8020) 000001497808665 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 6 0 1 3 1

Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

1. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL LITIS UT 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 45 93 61

42. Correo electrónico

defensajudicial@findlay.com.co

43. Código postal

44. Teléfono

3 1 2 5 4 5 5 2 4 6 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

6 9 0

2 0 2 4 0 1 2 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

7 1 4 4 8 5 5

54. Relación en la fuente a título de rent

55. Informante de exogena

56. Impuesto sobre las ventas - IVA

57. Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios adueneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

NO ☒

60. No. de Fotos:

0

61. Fecha

2024 - 02 - 02 / 14 : 15 : 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

NAVARRETE SUAREZ LAURA MELISSA

985. Cargo

Analista IV

Fecha generación documento PDF: 02-02-2024 02:15:46PM

1138408ECG50489

Ca463874659

12-12-23

Cadena. No. 890303340

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14978086651



(415)7707212489984(8020) 0000014978086651

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 6 0 1 3 1

Impuestos de Bogotá

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

7

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y distrital.

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 4 0 1 2 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 4 0 1 2 2

81. Hasta

2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante	170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14978086651



(415)7707212489984(8020) 0000014978086651

7. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 6 0 1 3 1

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha Inicio ejercicio representación

2 0 2 4 - 0 1 - 2 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

8 0 4 9 0 7 3 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

PABON

105. Segundo apellido

MORALES

106. Primer nombre

JORGE

107. Otros nombres

ELIECER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha Inicio ejercicio representación

2 0 2 4 - 0 1 - 2 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

3 2 5 4 3 4 2 1

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

TORO

105. Segundo apellido

BALCAZAR

106. Primer nombre

ELSA

107. Otros nombres

NIDIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha Inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha Inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha Inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14978086651



(415)7707212489984(8020) 000001497808665 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 9 6 0 1 3 1

Impuestos de Bogotá

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

NIT

3 1

9 0 1 0 6 4 2 9 1

1

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

1

119. Razón social

UMBRAL JURIDICO S.A.S.

120. Valor capital del socio

0

121. % Participación

5 0

122. Fecha de ingreso

2 0 2 4 0 1 2 2

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

NIT

3 1

9 0 0 9 0 9 9 8 9

6

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

2

119. Razón social

MAS BIENESTAR SAS

120. Valor capital del socio

0

121. % Participación

1 5

122. Fecha de ingreso

2 0 2 4 0 1 2 2

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

NIT

3 1

9 0 1 0 4 5 5 1 2

1

COLOMBIA

1 6 9

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

3

119. Razón social

FINDLAY CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio

0

121. % Participación

3 5

122. Fecha de ingreso

2 0 2 4 0 1 2 2

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

4

119. Razón social

120. Valor capital del socio

0

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

5

119. Razón social

120. Valor capital del socio

0

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

cadena.

República de Colombia

Pag. 5



ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO-----0214-----
DE FECHA: VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO
(2.024) OTORGADA EN LA NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.-----



DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

C.C.# 79.983.390

TEL.# 2170100 ext.; 1680

EMAIL : poderesjudiciales@colpensiones.gov.co

Actuando como representante legal Suplente de la Administradora Colombiana
de Pensiones - COLPENSIONES; EICE, con NIT. 900.336.004-7



MARIA TERESA GUTIÉRREZ OVALLE

NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Elabora : SEBASTIAN GUTIERREZ
REMSO : DR. JULIAN RESTREPO



Ca463872607



11387CCARF09990

26-12-23

12-12-23

cadena. No. 99999999

cadena. No. 99999999

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el notario

113820#5UB090C6

**NOTARÍA
76**

SNR SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
la garantía de la fe pública



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

NOTARIA SETENTA Y SEIS DE BOGOTÁ D.C.

Esta hoja corresponde a la última, de la **PRIMERA (1a)** copia de la escritura pública **No 214** de fecha **23 de FEBRERO de 2024**, otorgada en la Notaría 76 del Circulo de Bogotá D.C. Es fiel copia tomada de su original, La cual expido conforme al artículo 1º del decreto 188 del 12 de febrero de 2013 en 12 hojas útiles, debidamente rubricadas y selladas. Con destino al **INTERESADO**. Dada en Bogotá D.C. el: **24 de FEBRERO de 2024**.


MARIA TERESA GUTIÉRREZ OVALLE

NOTARÍA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

EXPIDIO: Alejandro Rusinque

Avenida Boyacá No. 51-21 PBX 601 7126958/59

Celular: 3203350770

E-mail: setentayseisbogota@supernotariado.gov.co

Página web: www.notaria76bogota.co

Bogotá, D.C. Colombia



Consejo Superior
de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES:
JORGE ELIECER

APELLIDOS:
PABON MORALES

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE COLOMBIA

FECHA DE GRADO
14 mar 2014

CONSEJO SECCIONAL
CUNDINAMARCA

CEDULA
80.490.732

FECHA DE EXPEDICION
21 abr 2014

TARJETA N°
241510